



EL POLICÍA JUSTO AGUILERA Y EL EMPRESARIO CARLOS ÓDENA QUERELLA ALUCINANTE

Como explicamos en el N° 0 de esta nuestra revista, el empresario catalán, D. Carlos Ódena Savalls, que se halla recluido en prisión provisional desde hace seis años, en la cárcel de Pereiro de Aguiar (Orense), en su querella criminal que ha presentado, relata una grave evasión de capitales que implica a los Magistrados de la Audiencia de Barcelona, Adolfo Fernández Oubiña y Carmen Figueras, los Abogados Juan Piqué Vidal, Medina Lerma, los Policías Justo Aguilera Fernández y Carlos Esteban Martín, además de los dos ex-Magistrados, expulsados del Cuerpo por el Tribunal Supremo Penalva y García Laverna y el financiero Javier de la Rosa. Dice la querella:

“Cuando la partida a evadir era superior a los 200 millones de pesetas, el camión donde se transportaban los capitales, iba acompañado por los dos ex Magistrados y el abogado Piqué Vidal. Si el capital evadido era inferior a los 200 millones, la escolta correspondía a los funcionarios de policía Justo Aguilera Fernández y Carlos Esteban Martín”

D. Carlos Ódena preparó el borrador de la querella criminal desde la cárcel de Pereira de Aguiar, un remoto lugar de la

provincia de Orense, donde se halla en prisión provisional desde hace seis años. Presentó la querella mediante abogado de oficio, que al ser de Barcelona, no ha podido comunicarse con su cliente. A pesar de ello y ante la gravedad de los hechos denunciados en una ocasión el abogado de oficio se trasladó a aquel remoto lugar, a su cargo.

La querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en principio la inadmitió, pero al presentarla con copia al Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Alto Tribunal indicó su admisión y tramitación.

El conocido narcotraficante internacional gallego Laureano Fernández Oubiña ha sido trasladado a la misma cárcel de Pereira de Aguiar, durante una semana. D. Carlos Ódena entonces ha sido trasladado a la enfermería, y el narcotraficante Laureano Fernández Oubiña trasladado a su celda, donde ha tenido acceso a todas su documentación, y pruebas documentales que le han desaparecido. D. Carlos Ódena ha denunciado estos hechos mediante su escrito de 11 de agosto de 1992, que seguidamente reproducimos.



Alm. Sr. Presidente
Al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Carlos Odona Savall, de profesión empresario, casado, natural de Barcelona y vecino de Madrid, c/ D. Anadón de la Cruz, n.º 52-22-4, 28.001-Madrid, y actualmente en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Orense), donde constan sus demás datos personales y penitenciarios, como mejor proceda en derecho, se dirige a V.E. y:

EXPOSICIÓN

Pase a informar a esa Sala, que al pasado mes de septiembre del 1.991, se trasladó al e encartado por marco tráfico internacional, inserto en la actualidad en la causa 13/90 del Juzgado de Instrucción Central de la Audiencia Nacional n.º 9.

De nombre D. Laureano Oubida Pinciro, cuyo fin del traslado a esta prisión, fue para contactar al que sujeta en relación a la querrela 43/90, instada ante esa Sala. El mismo vendió a requerimiento del Magistrado. Yendo Oubida a nombrado en esta causa en unión también de Javier de la Rosa Martí y Juan Piqué Vidal, según se comenta.

Propuesta del Sr. Oubida Pinciro. Desistir de esta querrela, ya que según le habría comentado a través de su abogado el Tribunal, la desestimaría y quedaría archivada, por haber mantenido contactos anteriores de su resolución, por algún miembro de ese Tribunal.

Contrapartida por mi parte. El abono del importe relatado en la querrela, más los importes de los patrimonios que había vendido a través de mi detención con sus intereses correspondientes, mediante la valoración por las partes, a consultas de especialistas en materia de inmuebles.

No implicar a nadie más de hechos delictivos y dejar el asunto en situación de vía muerta, también se incluye a los mismos a lo tiempo de mi estancia en prisión, de todos los años sufridos.

El motivo de el traslado a la prisión fue para

SI TODO ESTO NO
FUERA CIERTO, NO
CABE DUDA DE
QUE EL SR. ÒDENA
GANARÍA EL
PREMIO AL MEJOR
CULEBRÓN.

llegar a un acuerdo en ese sentido, otorgándose un mes para dicho acuerdo, y a cambio se otorgarían las libertades provisionales de las causas que tengo en recurso en unión de la condicional de la sentencia firme de La Coruña.

Pero antes habían llegado un notario a la prisión, con el fin de formular un acta de manifestaciones solicitadas de las denuncias, y este punto es cuando desistí totalmente. A continuación se despidieron a Orense un abogado de Madrid y otro de Orense, que según me dijo es el suyo y que venía a requerimiento de los encartados Adolfo Fernández Oubida, Juan Piqué Vidal y Francisco Javier de la Rosa Martí, en unión de otros.

Otro incidente que sucedió en el traslado en esta prisión de Orense, fue que la semana que el Sr. Oubida ingresó en el Centro, a él se le requirió el traslado a la enfermería, cuyo fin fue que el Sr. Oubida ocupó mi celda, teniendo en su poder las querellas presentadas en relación a este caso por parte de los letrados Sr. Adela Vázquez y D. Carlos Obregón, sustrayéndose varios documentos, de forma que se le citó en tal sentido al encartado, y al director del Centro indicando la fecha de ingreso del Sr. Oubida y al traslado a enfermería. Un dato significativo y muy importante en relación a los hechos.

También me informó que darían un toque a los letrados que me representaban, y creo que fue algún momento de incendio en el despacho. Como primer aviso con el fin de que desistiera en este asunto. Según me comentó, tales hechos se consumaron, exhibiéndose una hoja de periódico.

Por otra parte solicito a esa Sala que en caso de traslado y por motivos de seguridad, se me ingrese en la prisión de Farragosa, de esta forma el mismo día se me pueda traer e ingresar de nuevo en la prisión de Farragosa, de esta forma se evitará el alto riesgo existente de ingresar en la prisión modelo de Barcelona, una de las prisiones más conflictivas del Estado, y cada vez que estuvo en dicho recinto tuve problemas por la ruidosa de las condiciones inhumanas imperantes en dicho centro, siendo una oportunidad llevar a cabo un plan preconcebido para atentar contra mí con un máximo riesgo que supone el ingreso en la prisión de Barcelona por sus condiciones diversas.

Después se me informó por parte de esa Sala al respecto y se comunicó la resolución del mismo a mi representante legal.

Orense, a 11 de Agosto de 1.992
Pdo.: Carlos Odon Savall

LA MEJOR FORMA
DE ACABAR CON
LOS CORRUPCIÓN
ES CON LA
VERDAD
PUBLICADA

COMPARECENCIA

En Barcelona, y en la Comisaría de Distrito del Cuerpo Nacional de Policía de Audiencia, siendo las 18:55 horas del día 30-09-1991.

Ante los Funcionarios del referido Cuerpo con categorías de Policía y Policía, y carnets profesionales números 70426 y 70426, habilitados respectivamente como Instructor y Secretario para la práctica de las presentes.

COMPARECEN :
En calidad de denunciante ADELA VAZQUEZ LLUCH, con d.n. número 36770598, domiciliado en la calle SALLE, 136 2 1, BARCELONA, teléfono 3187549, nacido el día 11 de febrero de 1937 en BILBAO VIZCAYA, hijo de JOAQUIN y de TERESA.

Y MANIFIESTA :
Que como representante del Despacho de Abogados sito en la C/Ronda de San Pedro, 13 principal, denuncia el robo de los siguientes objetos y documentos: ordenador portátil de la marca Toshiba, sin número de referencia, disks, maleta de otro ordenador portátil, y otro ordenador de la marca Amiga 500 con todo el equipo complementario, interface sonido, equipo disketera, interface grafico y los cables, y la maleta de viaje, y una cantidad indeterminada de expedientes de casos llevados por el despacho, valorando todo lo sus- traído en "UN MILLON DE PETASSE", ademas de la cantidad de 51.000 EN EFECTIVO.

Que quiere reserbar la dicente que dicho despacho ha sido objeto de robo, con esta ocasión, cinco o veces.

Que al titular su marido Carlos OBREGON ROLDAN, le in- terpusieron una falsa denuncia hasta por la cual el Tribunal Supremo condeno en costas a los denunciados. Sufrio un tiro en el brazo el día 26 de mayo del mismo año. Por lo que la dicente cree que son presuntos delitos de las mismas perso- nas, teniendo como cabera a Javier de la Rosa, cuyo domici- lio es en la calle Doctor Fleming, 18.

Que al despacho entraron por una ventana, y han dejado tal desorden que no es posible en estos momentos conrear ni algo mas que falte. Que la falta de los expedientes puede crear grave inde- fension hasta el punto de imposibilitar el ejercicio de la abogacia.

Y no teniendo nada mas que manifestar firman la pre- sente en señal de conformidad con lo en ella escrito, en - union del Instructor de lo que como Secretario CERTIFICO.



2-29-91,402

EXCMO. SR. DELEGADO DEL GOBIERNO
DE CATALUNA
D. FRANCISCO MARTI JUMET.

ADELA VAZQUEZ LLUCH, ABOGADA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA Y VICEPRESIDENTE DE ACINCO- ASOCIACION AUTS CATALANA CONTRA LA INJUSTICIA Y LA CORRUPCION- de V.E. COMPAREZCO Y CON EL RESPETO DEBIDO D I B O:

PRIMERO: QUE LOS DIAS 30 DE SETTEMBRE Y 3 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO HA SIDO ALLANADO EL DESPACHO OBREGON, PARA EL QUE V.E. SABE QUE DESDE HACE AÑOS SE VIENE SOLICITANDO PROTECCION SIN EXITO ALGUNO.

SEGUNDO: QUE ES OBVIO QUE LOS QUE ENTRAN, NO TIENEN INTERES ESPECIAL EN ROBAR, SINO EN DESESTABILIZAR COACCIONANDO PARA CREAR IMPOTENCIA Y NO SE SIGAN TEMAS QUE JUDICIALMENTE, CON GRAN DEMORA, ESTAN SANADOS HASTA EN EL TRIBUNAL SUPREMO.

TERCERO: QUE LAS ACCIONES QUE HA SUFRIDO MI MARIDO, TITULAR DEL DESPACHO, DR. OBREGON HAN SIDO: FALSA DENUNCIA EN ABRIL 1984, POR LA QUE HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENO EN COSTAS A LOS DENUNCIANTES, SEQUESTRO DE 9 DIAS EN FEBRERO 1988, TIRO EN EL BRAZO DERECHO EN MAYO 1988 Y SEIS ALLANAMIENTOS, DOS CON INCENDIO, QUE SON PRESUNTOS INDICIOS RACIONALES DE COACCIONES Y AMENAZAS.

CUARTO: QUE LA ENTREVISTA QUE ME CONCEDIO EL SECRETARIO GENERAL AYER DIA 7 DE OCTUBRE, QUIEN ME ATENDIO MUY AMABLEMENTE, SIN SOLUCIONAR PROBLEMA ALGUNO, POR NO TENER PODER DE DECISION, HA SIDO TOTALMENTE INFRACTUOSA.

QUINTO: QUE DE TODAS MANERAS, LE ENTREGUE LA DENUNCIA DEL DIA 3 DE OCTUBRE, QUE ESPERO OBRAR EN PODER DE V.E.

POR TODO ELLO:

SUPlico QUE TENIENDO POR PRESENTADO ESTE ESCRITO SE SIRVA ADMITIRLO Y DAR LAS ORDENES OPORTUNAS PARA QUE FINALMENTE Y A LA MAYOR BREVEDAD ME SEA CONCEDIDA UNA ENTREVISTA PERSONAL CON V.E., YA QUE EL SILENCIO CORROMPE MAS QUE LA MENTIRA Y NO AYUDA A SOLVENTAR NINGUN PROBLEMA.



Diari de Barcelona. Dimecres, 9 de setembre de 1992

ACTUALITATS

TRIBUNALS

El "narco" Laureano Oubiña va extorquir en nom d'un magistrat

J.B.
Barcelona

El narcotraficant Laureano Oubiña, detingut amb motiu de l'operació Nècora del jutge Baltasar Garzón contra els capos gallecs, va extorquir l'empresari català Carles Òdena Savall, empresonat al centre penitenciari de Pereiro de Aguiar (Orense), segons afirma l'empresari. Òdena va denunciar els magistrats Adolfo Fernández Oubiña -de procedència gallega, però

sense parentiu amb el narcotraficant- i Carmen Figueras. Els dos magistrats, destinats a l'Audiència de Barcelona i el Tribunal Superior, respectivament, seran objecte d'un avantjudici o judici previ el 17 de setembre vinent a causa de les irregularitats denunciades per Òdena.

En una carta que l'empresari ha escrit al president del Tribunal Superior, José Antonio Somoza, Òdena afirma que mentre el narcotraficant Laureano Oubiña era a la presó de Pereiro de Aguiar, aquest el va advertir perquè desistís de la querella contra el magistrat Oubiña. A canvi, el compensarien econòmicament i se li atorgaria la llibertat. També li va recomanar que optés per aquesta via ja que s'havien fet contactes perquè la querella fos arxivada.

Carles Òdena es troba a la presó acusat d'estafa. Segons afirma, en les seves causes hi han intervingut directa o indirectament els dos magistrats que ha denunciat.

A la carta, Òdena manté que el narcotraficant Laureano Oubiña va manifestar que parlava

en representació del magistrat Fernández Oubiña, el financer Javier de la Rosa i l'advocat barceloní Joan Piqué. Carles Òdena relaciona els tres amb una xarxa d'evasió de capitals a Andorra, amb una possible connexió amb una altra al Brasil, que investiga l'Audiència Nacional.

A la carta esmentada, Carles Òdena relata que es va negar a les proposicions del narcotraficant i que pocs dies després es va veure sorprès pel fet que el traslladaven a la infermeria. "Oubiña va ocupar la meua cel·la, va tenir al seu poder les querelles i em va sostreure diversos documents. També em va informar que li farien un toc d'atenció als meus lletrats", denuncia a l'escrit enviat al Tribunal Superior.

La defensa d'Òdena ha denunciat a la policia haver estat objecte de diversos assalts al seu despatx professional i la destrucció de documentació. Aquests fets, i una còpia de la carta d'Òdena, han estat comunicats al fiscal en cap del Tribunal Superior, Carlos Jiménez Villarejo, perquè investigui el cas. ■

CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA, Capítulo 6

EL POLICÍA JUSTO AGUILERA Y LA PERSECUCIÓN A D. PEDRO NÚÑEZ



D. PEDRO
NÚÑEZ
RAMÓN

D. Pedro Núñez Ramón es un agente comercial, como Gerente de DISTEC, S.A. (Distribuciones Técnicas, S.A.) entró en contacto con la Escuela Profesional Superior al objeto de distribuir sus cursos de mecánica. D. Pedro Núñez aprovechó la amplia experiencia obtenida desde el cargo de Jefe de Ventas de CEAC que ostentó durante muchos años. Corría el año 1981 cuando su empresa, DISTEC, S.A., empezaba una etapa de consolidación, consecuencia de los muchos sacrificios personales de D. Pedro Núñez, cuando el policía Justo Aguilera se cruzó en su limpia trayectoria.

Comenzó a elaborar con sus ayudantes, un voluminoso atestado policial. Un atestado absolutamente falto de rigor y palpablemente parcial, tal y como la Justicia demostró nueve años después.



Charlamos con D. Pedro Núñez:

¿Cuál fue su primer contacto con el policía Justo Aguilera?

En realidad la investigación, (o lo que ellos llamaban investigación, que como tal, no la hubo) la llevaban sus colaboradores. Se presentaron de improviso en el domicilio de DISTEC, S.A. para que les acompañara a la Jefatura Superior de Policía para "hacerme unas simples preguntas". En ningún caso como detenido (nunca he tenido antecedentes penales). Al parecer el hecho de que me vinieran a buscar obedecía a que según la Policía yo no había hecho caso a dos citaciones. Citaciones que yo jamás había recibido, tal y como se demuestra en el Sumario, ya que en el mismo siguen ignorando mi verdadero domicilio social, curiosamente, cuando los ayudantes de Aguilera estuvieron personalmente en el inicio de la investigación.

Llegados a la Jefatura de Policía, Justo Aguilera estaba ocupado tomando declaración a otras personas, por lo que los mismos ayudantes me tomaron declaración. Todo el punto de contacto que tuve con este individuo (Aguilera), fue que en aquel momento, sin información previa alguna, dirigiéndose a sus ayudantes les dijo: "Este está "pringado". ¡Bajarlo para abajo!". Se refería a las inhumanas instalaciones de los sótanos del edificio.

¿Cuánto tiempo permaneció allí?

El periodo máximo que les permite la Ley: tres amargos días.

¿Y al tercer día que ocurrió?

Me llevaron a presencia judicial. Desconozco el atestado policial que presentó Justo Aguilera (que no podía ajustarse a la verdad, tal y como se demostró en la Sentencia), pero me imagino que era voluminoso y tomó arte y parte como si fuera un Juez al objeto de conseguir ascensos. El Juez dictaminó una fianza que había que depositar en Gerona. Ello me supuso pasarme unos días en la Cárcel Modelo hasta poder depositar la fianza.

¿Qué consecuencias le llevó todo ello?

De toda clase.

En primer lugar, un amigo mío Ramiro Bello, fue a Jefatura a interesarse por mí, al conocer mi detención. Al presentarse mi amigo Ramiro, Justo Aguilera le dijo que también quedaba detenido y lo condujo a las mazmorras de los sótanos donde estuvo unos días. Y todo por preocuparse por mí.

Consecuencias morales: de toda índole, me hundió moralmente. Los nueve años que tardó la sentencia sufrí un verdadero calvario. En el aspecto económico y profesional las pérdidas de DISTEC, S.A. y propias las calculo en unos 25 millones de pesetas mas el desprestigio que es invaluable. Los clientes dejaron de pagar.

¿Por qué cree usted que este policía, Justo Aguilera, actúa así?

Al desconocer los mecanismos de investigación, supongo que será para ganar prestigio, dando por hecho que eres culpable y no presunto, como se demostró en la Sentencia.

Usted sabe que su caso no es único sino típico de Justo Aguilera. ¿Por qué cree usted que le mantienen en el puesto, incluso le ascienden?

Me imagino que cendra unas directrices muy concretas y un apoyo suficientemente fuerte de manera que prima el ascenso o las medallas antes que la Investigación coherente y con las diligencias necesarias para que el Juez pueda dictaminar desde la imparcialidad y no, como en el caso, después de nueve años de sufrimiento de toda clase y daños morales y económicos irreparables tanto a nivel personal como en el ámbito social del entorno.

El Fiscal, posiblemente influenciado por el atestado de Justo Aguilera pedía ocho años de prisión mayor. Poco antes del juicio me hicieron una curiosa oferta: Que desistiera del Juicio a cambio de una condena de ocho meses. Lo cual demuestra que el propio Fiscal no estaba muy seguro de la investigación de Justo Aguilera y sus compañeros y anidantes.

Yo, convencido de mi inocencia deseché esa "oferta", aún sabiendo que una condena de ocho meses dada mi condición de persona Umpia de antecedentes, al ser menos de un año, no la cumpliría. A pesar de ello, quise, que se celebrara Juicio a fin de que se demostrara mi inocencia.

¿Cual fue el fallo de la Sentencia? Aquí se lo muestro. Coplero textualmente

"FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos libremente al acusado PEDRO ANTONIO NÚÑEZ RAMÓN del delito continuado de estafa, por el que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal, declarando de oficio las costas causadas".

Gracias D. Pedro por su valentía y su entereza.

¡Que Dios le bendiga!



EL POLICÍA JUSTO AGUILERA Y LA ESTAFA EN EL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA



El viernes 10 a abril de 1991 en varios periódicos apareció una noticia espectacular bajo diferentes encabezamientos. Juicio en la Audiencia por una estafa millonaria. El fiscal pide 224 años de condena por una estafa de 990 millones al Banco Exterior.

Este juicio fue calificado como el mas multitudinario que se recordaba en Barcelona desde hace mas de 40 años y por razón de espacio se celebraba en la antigua Capilla de la Audiencia.

El juicio comenzó el jueves día 9 por la mañana y estaba previsto que durara hasta el domingo día 12, casualmente Domingo de Ramos.

Pero al segundo día, es decir, el mismo día 10. **la Fiscal retiró la acusacion de 17 procesados** inmediatamente despues de haber oido las alegaciones contundentes de las defensas, vaciándose notablemente el local, ya que logicamente dejaron su lugar sus correspondientes abogados. Afortunadamente la presidencia del tribunal dispensó a sus procuradores de estar presente en el acto de la vista. La acusación privada, es decir el BEX (Banco exterior de España) se adhirió a la petición fiscal.



Los 17 procesados que en mayor o menor tiempo habían pasado por la prisión con gran angustia por su parte y de todas las familias, que anteriormente habían sido detenidos y duramente tratados por "estrictos" policías muy cuidadosos de sus obligaciones, como el tan conocido Justo Aguilera Fernández, Jefe entonces de la Policía Judicial, que han visto sus fotos en la prensa y en la televisión como si de vulgares delincuentes se tratara. ¿No reciben rectificación alguna de ningún medio, como está previsto en nuestra Constitución?

Sus derechos han sido vulnerados y su capacidad de sorpresa desbordada y muchos están aun gravemente traumatizados.

La Sentencia que salió con bastante celeridad, confirmó efectivamente que el Fiscal retiró de 17 procesados la acusación contra el BEX... y además la Sección Novena absolvió a otros seis acusados que veían agravada su angustia dos días mas

Con lo que del multitudinario juicio que hubo de celebrarse en la capilla por cuestión de espacio... sólo cuatro personas, son consideradas presuntas autoras de estafa. Teniendo en cuenta como se celebró el juicio y con el respeto debido a las personas investidas de la augusta función de juzgar y hacer cumplir lo juzgado... Cabría preguntarse si realmente son culpables o el Banco Exterior de España actuó con negligencia o temeridad y mala fe y no solo debiera pagar las costas del juicio sino ser sus altos directivos quienes estuvieran sentados en el banquillo de los acusados por haber intentado manipular una estafa de la que ellos eran no solo perfectos conocedores, sino presuntos únicos responsables.

¿Y los perjuicios de los 23 o 27 procesados a cargo de quién quedan? ¿Y sus angustias...?

El tema no está cerrado... Pero el silencio corrompe más que la mentira, como en la mayoría de los casos, del asunto no se ha vuelto a hablar.

En fechas de Navidad de 1985, cuando la empresa SKYMASTER, S.A. fabricaba productos de cosméticos, y pro mediación de DISPROPEL, S.A. los distribuía por toda Cataluña, y al llevar



D. Jose María Otero, uno de los 17 falsamente inculcados por el policía Justo Aguilera (en este caso).

aproximadamente un año de actividad constante, decidimos empezar a extendernos por todo el territorio español, por fases.

Por aquel entonces facturábamos por un promedio mensual de 5.000.000 de los cuales un 30% lo cobrábamos al contado y el resto a 30, 60 y 90 días. La mayoría de veces eran letras que negociábamos por mediación del Banco de Bilbao, en el cual teníamos un descuento bancario de 1.000.000, insuficiente para la gran cantidad de inmovilizado en cobro.

Al decidir expansionarnos tuvimos que soportar durante varios meses una desestabilización en Caja ya que por parte de los socios no se efectuaba ampliación de capital; los pedidos eran muchos y no se cobrava lo suficiente en metálico para cubrir la estructura fija y fue por mediación de mi socio Aurelio Fernández Navarro que me comentó que conocía a un amigo de toda la vida y que tenía un negocio, no me acuerdo de que era, pero si le hacíamos una visita, probablemente podría darnos la solución, por mediación de un compañero que ejercía como Director del Banco Exterior de España en Hospitalet, y

según él podía aceptarnos unas clasificaciones bancaria sin bienes ni avales.

Yo accedí a ir a verlo, pero le dije a Aurelio:

- Es imposible que este banco nos conceda una clasificación bancaria sin bienes ni avales.

Pero él me dijo que no perdíamos nada por intentarlo, total que fuimos; y este señor que se llama José Antonio Sánchez me explicó que él conjuntamente con el Director del banco estaban intentando sancar y reflotar una empresa que se llama KRIS; que se dedicaba a la limpieza de almacenes, fábricas, etc. y que su amigo Plácido Martínez Mira, director del banco, había quedado enganchado con unas clasificaciones que le habían hecho a la empresa KRIS, y la única forma de solucionar el problema era por mediación de varias empresas, hasta sancarla del todo. No estuve de acuerdo con la explicación que me dió el Sr. Antonio ya que no veía legalidad en todo este asunto. Total que no aceptamos y nos fuimos.

Al pasar unos días Antonio vino a nuestro despacho y nos dijo que era una lástima que no aceptásemos ya que por parte de él y el Director del Banco no tendríamos ningún problema. Total que mi empresa iba tan mal que acepté, pero con muchas dudas por mi parte volví a repetirle: ¿Este compañero tuyo es de fiar? Y me dijo si que lo conocía de toda la vida y finalmente aceptamos.

Al día siguiente vino a mi despacho un señor con el nombre de Miguel Martínez Arbalat. Nos dijo que era compañero de Antonio y del Director del banco, y venía a saber si aceptábamos, le dijimos que si pero con una condición: que la primera letra de ellos fuese devuelta romperíamos la negociación; por su parte aseguró no dejar ninguna letra pendiente de pago.

Y a partir de aquí se precedió a abrir una cuenta corriente con SKYMASTER, S.A. y DISPROPEL, S.A.

Las aperturas fueron de 10.000 pesetas por empresa, entregadas en efectivo, las clasificaciones fueron de 10.000.000 de pesetas por empresa de las cuales nosotros podíamos disponer de 3.000.000 por empresa para negociar nuestro papel; el resto lo negociaban ellos con empresas que después de hacer mis averiguaciones resultaban ser



falsas, al poco tiempo se hizo una ampliación de riesgo por empresa de 5.000.000 mas para poder ir pagando los primeros vencimientos...

Al principio todo iba bien, nosotros negociábamos nuestra parte de descuento y ellos la suya, las remesas eran aceptadas al momento y el Sr. Miguel Arbalate, nos traía al despacho las letras, los impresos y los talones de los cuales nosotros podíamos disponer de nuestra parte del papel abogado por el banco y ellos podían disponer de las cantidades del papel que aportaban para su descuento. La apertura del descuento bancario y cuncta corriente de SKYMASTER se hizo en el propio banco y allí es donde conocí al Director Sr. Plácido Martínez Mira.

Al poco tiempo de estar operando con ellos el Banco Exterior me llamó advirtiéndome que tenía un descubierto de 300.000 pesetas y debía ingresar este dinero lo más pronto posible. En aquel momento hice por manera de encontrar al Sr. Miguel Arbalate y tuvimos una discusión fuerte. Él se me excusó diciéndome que no tuviera miedo que no se volvería a repetir este fallo de impagado, yo no me conformé con la excusa y fui a ver a José Antonio Sánchez, le amenacé que si volvía a ocurrir esto lo setiría mucho, pero pediría por parte de ellos el abono total de las remesas.

Al pasar unos días volvieron a llamarme del banco diciéndome que tenía descubiertos por valor de 1.000.000 de pesetas, y fue cuando decidí romper con esta gente, y lo hice de la siguiente manera: Por mediación de mi secretaria, pudimos localizar a Miguel Arbalate el cual era muy difícil de localizar ya que cambiaba de despachos constantemente, por casualidad llamé el citándome en una cafetería esquina calle Aribau, volvió a disculparme diciéndome que no pasaría mas y me ofreció en un maletín 1.000.000 de pesetas o 500.000, no recuerdo ahora, y me pidió que ampliásemos las remesas con 5.000.000 de pesetas mas cada empresa, le dije que no y que me hicieran el favor de pagar todas las letras que quedaban pendientes o daría parte a la Policía y a la Central del Banco, Miguel Arbalate solo me dijo que no fallarían en los pagos, y así a partir de aquella fecha cumplieron; pagaron todas las letras y me quedaron las clasificaciones a cero y por parte mía no las utilicé mas; Miguel Arbalate hizo un comentario, que si yo daba parte a la Policía también quedaría salpicado y le dije que de acuerdo, pero que yo en el fondo solo había servido de puente, el

dinero yo no lo tengo ya que de lo contrario se lo debería al banco o a alguien. Le pedí que hicieran unos documentos conforme acreditaran en parte que el dinero que se extraía por conducto de ellos eran justificables y entonces me enviaron dos documentos acreditando que la empresa SKYMASTER y DISPROPEL habían dejado dinero a la empresa KRIS.

Recuerdo que el Julio de 1986 me llamó por teléfono Miguel Arbalate, diciéndome: "... eres un imbécil, podías haber hecho mucho dinero con nosotros, tienes todas las letras pagadas". Yo le contesté que eso era lo que debía hacer.

A los pocos días tuve que asistir a una declaración en Hospitalet y me encontré con los que habían intervenido en este asunto o por lo menos varios, tuve que hacer declaración y ahí hice, si no recuerdo mal creo que siempre declaré lo mismo, solo hubo por parte de Miguel Arbalate una pregunta a mi directamente y era la siguiente: ¿Te acuerdas cuando me dijistes si quería participar en un negocio de prostitución? Eso lo dijo delante del Juez y yo contesté: **A mi no me compliques con tus asuntos, ni he participado nunca en esto ni**



lo haría nunca; eso déjalo para los golfos de tus amigos que seguramente te dirán que si. Firmé la declaración y me marché con mi abogado Sr. Llop Sallarés a comer, no obstante me enteré de que muchos empresarios habían estado algunos días e incluso meses en prisión, incluso los dejaron en libertad y al poco tiempo los volvieron a mandar otra vez a prisión, en cambio a mi no me molestaron mas.

A partir de aquí hubo un incidente, el día 23 de Julio de 1987 recibí una notificación de procesamiento.

Al ir a recogerlo, me hicieron varias preguntas, la primera era que desde cuanto tiempo hacía que yo operaba con el Banco Exterior de España; según el acta decía que desde Septiembre de 1984 hasta Octubre de 1986, lo cual no era cierto porque las empresas SKYMASTER y DISPROPEL comenzaron sus operaciones y apertura de cuentas en Noviembre de 1985 y acabó en Julio de 1986.

La segunda pregunta era qué personas conocía yo personalmente y cuales fueron los que me ofrecieron el descuento bancario, yo respondí que el primer contacto que tuve para aceptar las clasificaciones fueron por mediación de mi socio Aurelio Fernández Navarro, el cual ejercía el cargo de Administrador de DISPROPEL, S.A., y por mediación de él a su buen amigo José Antonio Sánchez, y por mediación de este señor conocí directamente a Miguel Arbalate, ex-banquero del Central y por mediación de este conocí posteriormente al Director del Banco Exterior de España Sr. Plácido Martínez Mira.

Todas las otras personas que están dentro de este Sumario no las conozco.

La tercera pregunta era si yo participaba o conocía a las sociedades que en el acta exponen con los siguientes nombres: KRIS, ALOGRAN, ARGRASA, VIDEOGRAMA, GROTA, etc...

Contesté que no, que solo conocía a KRIS y no directamente, ni siquiera había estado en sus almacenes o despachos, etc., sino porque por mediación de presiones mías pedí un documento que acreditara donde iba a parar el dinero de nuestras cuentas bancarias. Firmé el conforme y la recogida del Acta de Procesamiento.

Hace aproximadamente dos años se presentaron dos señores diciendo que venían a embargar por el valor de 900.000.000 de pesetas, y mi esposa



que los atendió, dijo que ella no sabía nada de ese asunto y que su esposo ya no vivía en casa porque estaba en trámites de separación, no dejaron ningún documento y se marcharon.

Recibí citación con el Juzgado de Instrucción Número 5 de Hospitalet el 26 de Octubre de 1990, para presentarme el 12 de Noviembre de 1990 al objeto de notificar autoapertura, desiganción abogado y procurador.

Aproximadamente a primeros de septiembre del mismo año mi socio estando de vacaciones me llamó y me dijo: Otero, ¿te has enterado de lo que ha pasado en el Banco Exterior de España de Hospitalet?, yo le contesté que no, y me dijo que estaban averiguando un desfallo de 900.000.000.- de pesetas, me preguntó si teníamos algo pendiente en el banco, y yo le dije que no, que iría al banco a averiguarlo. Así lo hice, estaban las cuentas a cero de todo tipo de deuda.

A los pocos días se me presentaron a mi despacho la Brigada de Estafas, al frente de la cual estaba el propio Justo Aguilera, diciéndome que les acompañara a la Via Layetana y allí Justo Aguilera me preguntó que si me llamaba José María Otero Ordeig, contesté que sí. Me dijo: "queda usted detenido", le pregun-

té proque y me dijo con malos tratos que por estafa al Banco Exterior de España; le contesté que yo no debía nada al banco y al final me permitió hablar con mi Abogado D. Juan Llop Sallarés, que se presentó al cabo de una hora, hice una declaración por escrito, luego me dijo mi abogado que al día siguiente quedaría en libertad.

Pasé la noche en el calabozo de Via Layetana y al día siguiente declaré otra vez ante el Juez, me volvieron a dejar en el calabozo y por la noche ingresé en la Modelo, una vez estaba dentro de la Modelo el Sr. Llop hizo los pasos para mi puesta en libertad, estuve en la Prisión tres días.

Tres días sin poder ver a mi esposa ni a mis queridos hijos.

Era horroroso para mí. Auténticamente kafkiano encontrarme en la Modelo en una celda junto con atracadores y peligrosos delincuentes de toda clase, sabiéndome completamente inocente tal y como más tarde se demostró.

Aguilera me hizo salir en los principales periódicos como si se tratara de un estafador, con mi propia foto para mayor descrédito de mi bien ganada reputación.

No guardo rencor a Justo Aguilera por el montaje que me hizo, aunque los daños tanto materiales como psíquicos que me causó resultan irreparables. Solo pido a Dios que alguna Autoridad tenga el valor suficiente para cortar de raíz este rosario de atentados a la dignidad, al prestigio y al honor de personas inocentes.

Porque ya somos demasiadas las víctimas inocentes de Justo Aguilera que sólo después de pasar un largo y amargo calvario conseguimos que la justicia nos reconozca la inocencia cuando ya los daños resultan irreparables.

*"Si te encuentras en el
Juzgado de Guardia
y se te cierran las puertas...
La revista
EL JUZGADO DE GUARDIA,
en acción
te abre sus páginas".*





EL POLICÍA JUSTO AGUILERA Y EL DR. CARLOS OBREGÓN

Desde el año 1985 el Grupo de Estafas de la Policía cuyo jefe era D. Justo Aguilera, así como su colaborador D. Carlos Esteban investigaban la estafa de SIRSA en la que según ellos iban a salir hasta 17 procesados por la cantidad de irregularidades presuntamente delictivas que se iban descubriendo. El Dr. Obregón defensor de los extrabajadores de la empresa SIRSA colabora con ellos, es decir, con los policías y al tener el Despacho muy próximo, era normal que le llamaran y él acudiera a la mayor brevedad posible para comentar sobre dicho tema.

El día 11 de Abril del 86 recibió una de estas llamadas y acudió a la Jefatura Superior de Policía, diciéndole el policía Justo Aguilera que quedaba detenido... La perplejidad es fácil adivinarla, pensaba que era una broma... pero era cierto.

Llamaron a casa preguntando por él, es decir por Carlos Obregón y al contestar que no estaba inquirieron con quién hablaban:

- Soy su hija.
- Pues su padre está detenido por estafa.

... ¡Tortura síquica!

A partir de aquí un rosario de angustias, afortunadamente se le ocurrió requerir la presencia del diputado de guardia del Ilustre Colegio de Abogados que junto a la esposa del Dr. Obregón, también abogada, presentaron "habeas corpus". No explico la cantidad de vejaciones y humillaciones que tuvo que sufrir el Dr. Obregón... y su familia.

En cuanto se presentó a presencia del Juez quedó en libertad inmediatamente, sin fianza.

El abogado D. Gonzalo Quintero Olivares que ha sido jefe de los Servicios Jurídicos del Estado, defensor de D. Carlos Obregón, acabó el escrito con el SUPPLICO siguiente: "que comprendien-

**En cuanto se
presentó a
presencia del Juez
quedó en libertad
inmediatamente,
sin fianza.**

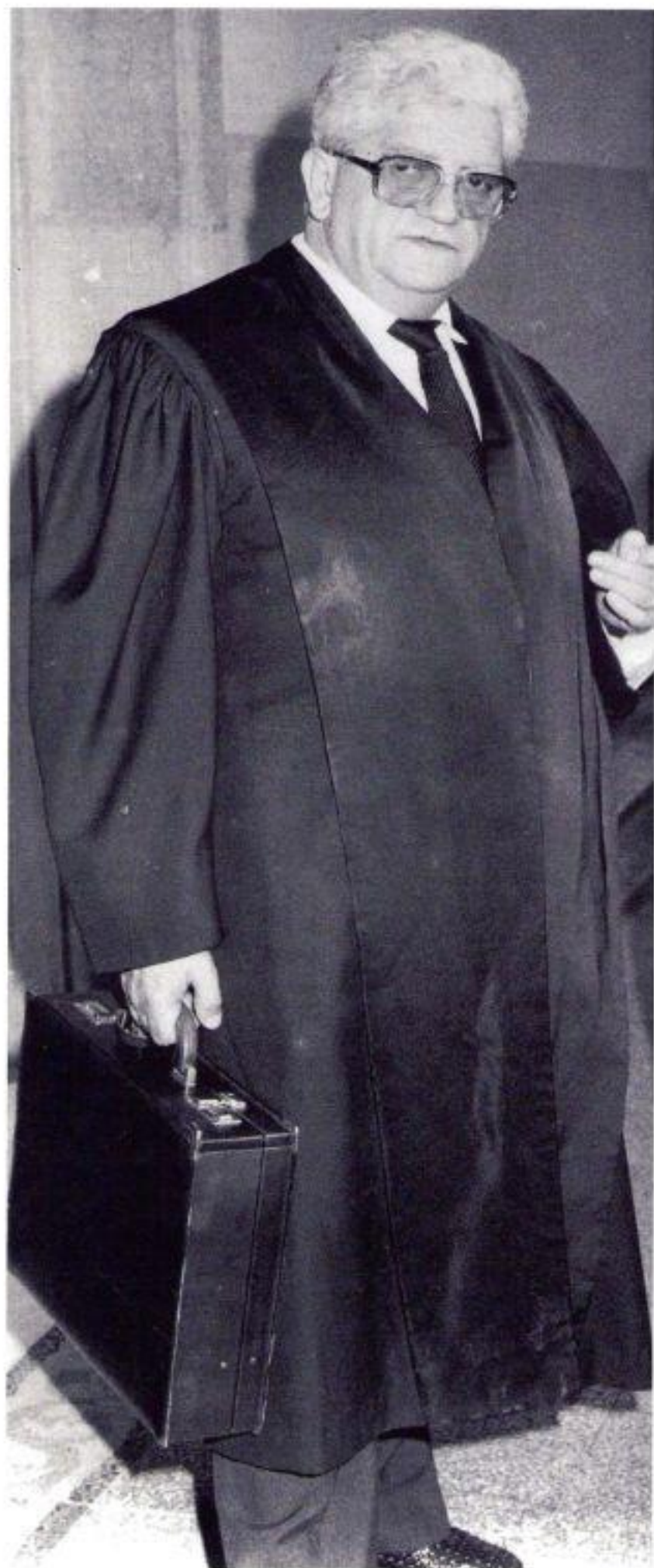
do que las acusaciones de Flaga Industrial contra el letrado D. Carlos Obregón son claramente atentatorias a su honor e incluso eventualmente constitutivas de delito de acusación falsa, se libre a esta parte testimonio de lo actuado a fin de entablar la oportuna acción penal o, en su caso, la acción civil de protección de la dignidad y el buen nombre".

Algo que ha quedado pendiente desde el 17 de Octubre de 1986.

Como se ve por los recortes de La Vanguardia el buen nombre del honesto letrado quedó vilmente perjudicado, a pesar de que todas las sentencias fueron favorables. Incluso la rectificación del día 24-4-86 está escrita de manera que se presta a equívocos.

En fin que el "modus operandi" del "eficaz policía" difiere poco en los distintos casos que presentamos a modo de muestreo.

¿Hasta cuando?



UN ABOGADO ACUSADO DE PRESENTAR FALSAS PRUEBAS EN UN JUICIO

Un abogado de Barcelona, Carlos Obregón, fué detenido esta semana acusado de presentar pruebas falsas en un juicio, informaron a "La Vanguardia" fuentes solventes.

Las mismas noticias recogidas por esta redacción indican que al letrado se le imputa el haber alterado los documentos presentados ante la Magistratura del Trabajo con el fin de que a un trabajador se le abonara una indemnización superior a la que le correspondía y así poder cobrar unos honorarios mayores.

Algunas fuentes indicaron que las actividades de Obregón fueron denunciadas a la policía por un juez, si bien este extremo fué desmentido por personas próximas a la investigación.

(La Vanguardia, 12-4-86).

LA DETENCIÓN DEL LETRADO CARLOS OBREGÓN NO GUARDA RELACIÓN CON UN DELITO DE FALSIFICACIÓN

El juez de guardia dejó en libertad al abogado barcelonés Carlos Obregón, que fué detenido momentáneamente por la policía, como publicó "La Vanguardia" en su edición del pasado día 12. En relación a este asunto, el decano del Colegio de Abogados, Antonio Plasencia ha puntualizado que el citado letrado fué asistido por un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de guardia aquella semana, y que en la denuncia presentada contra él no se mencionaba que el abogado hubiera podido incurrir en un delito de falsedad documental.

(La Vanguardia, 24-4-86)



A.- Que pasa por medio del presente escrito de ALEGACIONES a cumplir en tiempo y forma, lo acordado por el Juzgado, ante el que tengo el honor de comparecer por Providencia de fecha

B.- Que el método de trabajo seguido en la confección de este escrito de ALEGACIONES ha sido el siguiente:

1. METODOLOGÍA.

1.1. Análisis del Informe Policial de fecha 5-2-86.

1.2. Análisis de las Conclusiones del Informe Policial.

C.- Que el sistema empleado para la realización del presente escrito ha consistido en:

2. SISTEMÁTICA.

2.1. Utilizar el sistema de clasificación decimal universal.

2.2. Informatizar los antecedentes documentales del caso SIRSA - BUTSIR.

D.- Que de todo ello se han derivado las siguientes alegaciones:

1.1. Análisis del Informe Policial de fecha 5-2-86.

1.1.1. Dice el Informe de la Policía: "Se determinó que la forma más viable de conocer y poder probar los hechos acaecidos, era la de investigar paso a paso las compraventas, traspaños de dineros o bienes habidos durante la tramitación de la Suspensión de Pagos, siguiendo los documentos bancarios, principalmente, que siempre quedan en esas operaciones".

Sobido es que la Suspensión de Pagos es un procedimiento concursal y que los procedimientos concursales fundamentan su regulación en una Obra de Salgado de Somoza (Liberium Creditorum), y ya desde entonces (siglo XVI, bajo el reinado de Felipe IV, y siendo Primer Ministro el Conde Duque de Olivares) se consagra el principio de la "retroacción", que permite anular determinados actos que comprometen el común interés de los acreedores, por haberse sustraído bienes o derechos que deben ser garantía de todos los acreedores. Es insuficiente, en verdad, contentarse con "analizar los hechos acaecidos durante la tramitación de la Suspensión de Pagos", sin tener en cuenta lo que, ilícitamente, hubiere salido del patrimonio de SIRSA en el tiempo anterior a la presentación de la solicitud del expediente. Es el llamado "proximum tempus decoctionis", durante el cual se puede perjudicar a la masa de acreedores, al quedar burlados sus derechos. Por eso, en todas las legislaciones y en todos los tiempos se ha buscado el remedio de la retroacción, que permite investigar los hechos anteriores al momento del aforamiento de la existencia de crisis, o sea, que puedan devenir ineficaces aquellos actos patrimoniales realizados en perjuicio de los acreedores. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, retroactivo es aquello "que obra o tiene fuerza sobre lo pasado", porque, antes de solicitar la Suspensión de Pagos por el deudor, éste ha podido realizar actos dispositivos perjudiciales para todos o algunos de sus acreedores, preparatorios de lo que, luego, formalmente, se haya podido ejecutar durante la tramitación de la Suspensión de Pagos.

1.1.1.1. Por consiguiente, entendemos que la sola investigación de los hechos acaecidos durante la tramita-

A MODO DE EJEMPLO DE CÓMO ACTÚA EL POLICÍA JUSTO AGUILERA PUBLICAMOS EL ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO EL 5-2-1986 EN RELACIÓN A UN INFORME DE ESTE POLICÍA

ción de la Suspensión de Pagos" queda viciada de origen y por principio, al excluirse de la misma los hechos acaecidos con anterioridad. Por otro lado, se incumple asimismo lo acordado por el Juzgado, que dice textualmente "AMPLIAS GESTIONES".

1.1.1.2. Es tan importante el principio de la investigación retroactiva sobre los hechos acaecidos durante el llamado período sospechoso en el que se fundamenta el procedimiento, que su fijación, determinación o duración, puede ser ampliada y es determinante, como consecuencia, o, a la vista de los hechos investigados, hasta poder llegar al fondo de la cuestión.

1.1.2. Dice el Informe de la Policía: "Las contestaciones de los diversos Bancos y organismos se han demorado en algunas ocasiones durante varios meses, lo que ha ralentizado totalmente la investigación, haciendo que la misma se haya alargado hasta la fecha".

1.1.2.1. Vemos que la orden judicial era la de practicar las MÁS ACTIVAS y amplias gestiones... mediante oficio de fecha 10-4-85 y, según el texto antes transcrito, "la investigación ha sido ralentizada totalmente durante varios meses"; si bien la palabra "alentado" es un galicismo no recogido todavía por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se trata de una expresión muy utilizada entre los conductores de automóviles y significa ir a la "actividad mínima".

1.1.2.2. Parece obvio, por ello, que

el Informe de la Policía, del que traen a la menos activa causa estas alegaciones, debe ser considerado de una credibilidad muy parcial, dicho sea en términos de la más respetuosa defensa y según sus propias manifestaciones.

1.1.2.5. Ello es así, porque, si bien la policía ha trabajado con todo celo y rigor, es tal el laberinto de cuentas bancarias y sociedades de cartón piedra, si se nos permite la licencia lingüística, que los funcionarios policiales actuantes solo han podido aprehender aspectos parciales de todo el "maremagnum" maquinado para rescindir los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla de SIRSA y para perjudicar a los acreedores.

1.1.3. Dice el Informe de la Policía: "En la adjudicación no se entregaron los valores mobiliarios, que resultaron ser las acciones que SIRSA poseía de la entidad Butsir Maroc, S.A., pese a existir autorización judicial en ese sentido. Se ignoran las causas de esa no adjudicación, aunque muy bien pudiera ser que tales acciones de Butsir Maroc, S.A. no figuraron nunca en los activos de los balances de SIRSA. En la actualidad, como al parecer seguían perteneciendo a la empresa, han sido embargadas por los trabajadores".

1.1.3.1. Es elocuente que la Policía no haya podido salir de su ignorancia respecto a las causas de la no adjudicación de las acciones de Butsir Maroc, S.A., según se desprende del texto de su informe (página 5) antes transcrito.

1.1.3.2. La buena predisposición

de la Policía le lleva a deducciones propias de un lego en Derecho, cuando dice en su informe "que muy bien tales acciones pudieran ser sindicadas". Pues bien, en los Estatutos de Butsir Maroc, S.A., que obran en autos, lo dice expresamente y en la legislación relativa a las sociedades anónimas el estar sindicadas no obsta, en absoluto, para poder ser entregadas de acuerdo con "la autorización judicial en ese sentido".

1.1.3.3. Sufre error la Policía en su informe al decir que las acciones de Butsir Maroc, S.A. han sido embargadas por los trabajadores, lo cual es falso de toda falsedad, dicho sea en términos de la más respetuosa defensa.

1.1.3.4. Se ha logrado confundir de tal modo a los funcionarios policiales actuantes que no han reseñado el hecho de haberse solicitado al Juzgado por parte de SIRSA, y con posterioridad, certificación acreditativa de haberse autorizado la adjudicación a los trabajadores de las acciones de Butsir Maroc, S.A..

1.1.3.5. Ralla en el paroxismo de la ignorancia el hecho de no destacar que también los Sres. Interventores Judiciales del Expediente de la Suspensión de Pagos han sido burlados hasta el extremo de no incluir en el activo de SIRSA las acciones de Butsir Maroc, S.A. Se ha conseguido burlar a los probos funcionarios judiciales actuantes y se ha conseguido burlar a los Interventores Judiciales, expertos profesionales de la más alta cualificación técnica, uno de ellos nada menos que miembro numerario del Instituto de Censores Jurados de Cuenta de España y el otro del Colegio de Economistas de Cataluña.

1.1.4. Dice el Informe de la Policía: "Surge aquí una profunda discrepancia entre los señores DEVESA, BALADES y SÁNCHEZ, de una parte y los trabajadores querellantes de otra: Vicente DEVESA dice haber entregado 23.000.000 de pesetas en dinero efectivo... BALADES y SÁNCHEZ coinciden con DEVESA, y añaden que en la misma fecha y acto recibieron también del Sr. FERRAN RICO, representante de SIRSA, otros veintitrés millones de pesetas distribuidos en diez talones de diversas entidades bancaria librados contra cuentas de SIRSA... en concepto de dinero a cuenta de los salarios de tramitación. Los talones están firmados además de por los apoderados de SIRSA por dos Interventores Judiciales. Sin embargo en el documento de entrega se hace constar que esos 23.000.000 se reciben en concepto de atrasos... Es totalmente imposible que esa entrega obedeciera a los conceptos indicados pues en aquella época nada se debía por ellos, siendo admisible que obedecieran realmente a salarios de tramitación".

1.1.4.1. Sorprendentemente, el informe policial sigue diciendo: "Siendo admisible que obedecieran realmente a salarios de tramitación". Es que sorprende hasta un grado difícilmente calificable cómo puede ignorar la Policía que tampoco se le debía a la totalidad de la plantilla salarios de tramitación, pues "en aquella época tampoco se debía nada por ellos".

1.1.4.2. En la página sexta dice la Policía: "Que los 23 millones de pesetas en efectivo, caso de haberse entregado realmente". Uno no puede por menos que sorprenderse que el Sr. Comi-



sario Jefe firme el 5-2-85 (ya se ve que se trata de un error mecanográfico y que quiere decir 1986) un escrito en el que se plantea semejante duda respecto a si se entregaron o no esos 23 millones de pesetas, cuando ya incluso se han distribuido. Y, a mayor abundamiento, se ha extraviado el despacho remitido por el Juzgado de Instrucción núm. 21, Dilig. Previa N° 1411/85-B, el día 19 de Noviembre de 1985 al Juzgado de Instrucción núm. 3, Dilig. Previa N° 1962/84, en relación con los determinantes supuestos 23 millones de pesetas que dan lugar a la profunda discrepancia a la que refiere el Informe de la Policía Judicial.

1.1.4.3. Entendemos que el planteamiento de la cuestión, y para cumplir el espíritu y la letra del "encargo formal mediante oficio de 10-4-85 de practicar "las más activas y amplias gestiones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos" no puede resolverse con el sencillo eufemismo de "surge aquí una profunda discrepancia entre los Srs. DEVESE, BALADES y SÁNCHEZ, de una parte, y los querellantes de otra".

1.1.4.4. Entendemos igualmente, dicho sea en términos de la más respetuosa defensa, que el tratamiento desarrollado por el Informe de la Policía Judicial es tan disparatado que se deslegitima por sí mismo.

1.1.4.5. Se autocontadice el informe policial respecto de esta cuestión cuando, a renglón seguido, afirma "los 23 millones de pesetas en efectivo fueron depositados por los Sres. BALADES VENYS y SÁNCHEZ BLANCO en el Banco Urquijo Unión de Paseo de Gracia, 27".

1.1.4.6. A la vista de lo cual, uno no sabe si en verdad existieron o no existieron esos 23 dichosos millones.

1.1.4.7. Como colofón de este embrollo, en la página 37 (al dorso) del mismo informe aparecen disipadas las dudas de la Policía reseñadas en la página sexta, en cuanto a que los 23 millones de pesetas ya no tiene duda alguna la Policía sobre su existencia y afirma categóricamente que eran para pagos de salarios de tramitación, por cuyo concepto no se debía por aquellas calendas, y, sin embargo, se introduce un elemento nuevo que provoca la duda de quien o quienes conocían la existencia de esos 23 millones.

1.1.4.8. La conclusión tercera del Informe de la Policía es contundente: EXCLUYE TODA DUDA. Afirma algo que no coincide con los antecedentes ("si en la concurrencia de la intervención judicial cuando lo más cierto es que en la página sexta del informe se dice que firmaron dos Interventores Judiciales"). Si la cosa no fuera tan seria, por lo que entraña, podría tomarse a broma.

1.1.5. Dice el Informe de la Policía en la página onceava: "Actuación del Liquidador de SIRSA, Sr. Eduardo Schneider Subirana.- El 25-5-84 se celebró Junta de Acreedores de SIRSA... se trata de un convenio liquidador y en el que se proponía para llevar a cabo la liquidación al legal representante o a aquella persona que designase la entidad Estudios Técnicos Administrativos Fiscales, S.A., el legal representante de esta sociedad era D. Eduardo Schneider Subirana... Don José Revés Marcet en representación de SIRSA confirió poder

especial a favor del Sr. Schneider... para que dispusiera o gozara de las más amplias facultades de disposición.

Hay ahí un ejemplo palmario de la necesidad de investigar al llamado período sospechoso de todo procedimiento concursal. Y ahí está el vicio de la metodología y sistemática de que adolece el informe policial y al que se refiere la alegación primera de este escrito.

De haber investigado la Policía el hecho de saber quien firmó la solicitud de Suspensión de Pagos, hubiera podido comprobar fácilmente que fué el Sr. SCHNEIDER, como representante legal de SIRSA, quien solicita acogese a los beneficios de la Ley de Suspensión de Pagos. Hubiera podido saber que el Sr. SCHNEIDER aparece como acreedor de SIRSA, como representante legal de Estudios Técnicos Administrativos Fiscales, S.A., por doce millones de pesetas, cuya procedencia no ha quedado aclarada. Que en la Junta de Acreedores del 24-5-84 actúa el Sr. SCHNEIDER como representante legal de SIRSA, como representante legal de un acreedor cuyo crédito no ha sido aclarado bajo el ropaje jurídico de una entelequia o empresa de cartón-piedra, y, al final, SE ALZÓ como Liquidador de SIRSA.

Sobre los datos aportados por la Policía en su informe se ocha de menos el hecho de que la entidad "Estudios Técnicos Administrativos Fiscales, S.A." tuviese como domicilio en el Expte. de Suspensión de Pagos de SIRSA sito en Barcelona, calle Nicaragua núm. 61, el mismo domicilio que el Sr. SCHNEIDER, en nombre de la empresa SIRSA, para llevar a cabo la liquidación de ésta.

1.1.6. Dice el Informe de la Policía, página once (vuelta): "conocer así los cobros y pagos hechos por el Liquidador, que, pese haberse solicitado con reiteración, no ha presentado los libros de liquidación ante el Juzgado".

Hubiese sido muy conveniente que la Policía indicara en su informe que la entidad liquidadora, Estudios Técnicos Administrativos Fiscales, S.A., ha desaparecido del domicilio en el que figura en el Expte. de Suspensión de Pagos de SIRSA, según informó la misma Policía en su día al Juzgado, y que el legal representante de esta misma entidad liquidadora, el Sr. SCHNEIDER, se halla en ignorado para dero y ha sido requerido de forma reiterada por la Policía y el Juzgado.

1.1.7. Dice el Informe de la Policía, página 13 (vuelta): "Respecto a las cantidades que reclaman parte de los trabajadores de SIRSA, ya el Juez que entendía de la Suspensión de Pagos no aceptó la inclusión de esos créditos en la Lista Definitiva de Acreedores, ya que los mismos no se habían materializado, por corresponder a indemnizaciones por despido improcedente, que no habían sido fijadas, al haber recurrido el Fondo de Garantía Salarial la sentencia de la Magistratura de Trabajo declarando nulo el despido de los trabajadores".

1.1.7.1. Es lamentable que un informe policial se adolezca de un conocimiento tan profundo que algo sobre lo que se está informando sobre escrito, nada menos, que a un Juez Penal. Decir "ya el Juez que entendía de la Suspensión de Pagos no aceptó la inclusión de esos créditos en la Lista Definitiva de Acreedo-

res, ya que los mismos..." La Policía pudo haber averiguado perfectamente quién es el que acepta o no la inclusión de créditos Lista Definitiva de Acreedores, simplemente leyendo el procedimiento establecido en la Ley de Suspensión de Pagos de 26-7-1922, o bien preguntándole a los Interventores Judiciales. La expresión del informe policial "por lo que entendemos que el Liquidador no tenía por que pagarles", entendemos nosotros que es sencillamente lamentable. Y entendemos nosotros que es lamentable por partida doble. Y entendemos nosotros con la Ley de Suspensión de Pagos en la mano que el Liquidador a quienes NO tenía que pagarles era a los acreedores comunes y si a los privilegiados y preferentes. Y entendemos nosotros que el oficio del Juzgado de 10-4-85 ordena la Policía "practicar la más activas y amplias gestiones". Y entendemos nosotros que para discernir si tenía el Liquidador que pagar o no, están los Jueces y no la Policía. Y entendemos nosotros que si cada cual se dedica a cumplir con su obligación, posiblemente algún día se puedan esclarecer los hechos perseguidos en la presente causa penal.

1.1.8. Dice el Informe de la Policía en la página 24: "A lo largo de la investigación han sido aforando una serie de sociedades mercantiles que, de una u otra manera, han sido utilizadas... BUTSIR GAS, S.A., ÁREA COMERCIAL S.A., BUTSIR GAS JAÉN, S.A., COMINSER, S.A., esta última accionista mayoritaria de SIRSA con el 72% de sus acciones. La Policía en sus informes de 5-2-86 no consigna, a pesar de constar en la causa, en relación a las citadas sociedades lo siguiente y que ya consta en la causa:

1.1.8.1. Que BUTSIR GAS, S.A. fué creada, según ya consta en la causa, como empresa "filial" de SIRSA por el interés de ésta con sus clientes de disponer de una red comercial por todo el territorio de la geografía española. Este extremo consta en la Memoria "Instalaciones para Gas Butano de Butsir Gas, S.A. en la Puebla de Alfriden (Zaragoza), donde textualmente se dice: "Es interés de SIRSA tener una organización comercial, creándose a tal fin la sociedad "filial" BUTSIR GAS, S.A.", firmada dicha memoria por el Ingeniero Electromecánico D. Bernabé Canazo Carazo, Colegiado núm. 153, y firmada igualmente por el Director Técnico de BUTSIR GAS, S.A., D. Bernabé Canazo.

1.1.8.2. Que ÁREA COMERCIAL, S.A. fué constituida por BUTSIR GAS, S.A. como accionista mayoritario, caso con el 100% de su capital.

1.1.8.3. Que BUTSIR GAS, S.A. y ÁREA COMERCIAL, S.A. adquirieron de SIRSA, durante la tramitación del Expte. de Suspensión de Pagos de ésta, las patentes, marcas, moldes, matrices, maquinaria, nombre comercial de SIRSA, propiedad de la suspensión, por considerar dichos bienes como necesarios para su supervivencia comercial.

1.1.8.4. Que BUTSIR GAS JAÉN, S.A., amplió capital durante la tramitación de la Suspensión de Pagos de SIRSA, siendo suscrita dicha ampliación de capital casi en su totalidad por BUTSIR GAS, S.A.

1.1.8.5. Que COMINSER, S.A., accionista mayoritaria de SIRSA con el 72% de sus acciones suscribe capital de BUTSIR

GAS JAÉN, S.A. durante la tramitación de la Suspensión de Pagos de SIRSA.

1.1.9. Dice el informe policial de 5-2-86 en su pag. 28: "Resumen datos de TRADEXPASA... Los accionistas constituyentes no aportaron ningún dinero a la entidad, sino que lo hizo Juan Calvete Montorio, siendo los accionistas meros titulares formales. El 9-4-85 vendieron todas las acciones a Juan Calvete Montorio". No consigna la Policía que 15 días antes había sido detenido el Sr. Devesa por orden del Sr. Juez Instructor y aclarada la anómala posición de las otras dos socias fundadoras de TRADEXPASA, una de ellas taquillera del Metro y la otra auxiliar técnica sanitaria y que habían sido invitadas por la esposa del tal Devesa para actuar como testeros del Sr. Calvete en la constitución de dicha sociedad.

Tampoco refleja la Policía las declaraciones de Marios Loscos Marsol, de quien Devesa dijo el día 20-3-85 que había sido el economista redactor de los estatutos de TRADEXPASA. El Sr. Loscos niega haber tenido nada que ver con TRADEXPASA y aclara que la correspondencia recibida en el domicilio, también falso de TRADEXPASA, se entrega a la recepcionista de CIDESPOT, S.A. por la Srta. Maribel.

Que la propia recepcionista Maribel ha manifestado que tenía instrucciones del Sr. Calvete de guardarle la correspondencia de una serie de empresas entre las que se encuentra TRADEXPASA, cuya relación obra en la causa, aportada por el mismo Sr. Loscos.

También podía haber hecho constar la Policía en su informe de la página 28, que CIDESPOT, S.A., además de ser recepcionista de la correspondencia de TRADEXPASA, acoge al Sr. Calvete para hacer gestiones y que el Presidente del Consejo de Administración de CIDESPOT, S.A. es el Sr. D. Lorenzo Rosal Bertrán y que el Sr. D. Juan Pascual Barrachina formó parte del Consejo de Administración de CIDESPOT, S.A. hasta el año 1982.

Podría haber hecho constar en su informe la Policía que el Sr. D. Lorenzo Rosal Bertrán es el Presidente del Consejo de Administración de COMINSER, S.A. y que el Sr. D. Juan Pascual Barrachina había sido Secretario de esta sociedad hasta el año 1982 y que el Sr. D. Juan Pascual Barrachina es el accionista mayoritario de todas las empresas del Grupo de Empresas BUTSIR, del que es empresa "matriz" la empresa SIRSA.

Que el Sr. Devesa declara en 20-3-85 que si no constituyó la sociedad TRADEXPASA con su mujer e hija, como otras varias que ya tiene así constituidas, fué porque le aconsejaron así el economista y el abogado. Conviene resaltar que el economista y el abogado recomendaron para que no figuraran ni su mujer ni su hija en TRADEXPASA.

1.1.10. Dice el Informe de la Policía en la página 37: "Existen indicios diversos de que entre la empresa y los trabajadores existió un acuerdo".

Es tal el maremagnum de documentos, diligencias, confusiones, incluido todo un rosario aural de sociedades mercantiles de cartón-piedra, que hasta los mismos investigadores policiales quedan



confundidos, puesto que el acuerdo existió y está aportado a la causa por el Sr. SCHNEIDER. Lo que ocurre es que el pacto está firmado entre los representantes legales de la empresa y los apoderados de los trabajadores, pero no por los representantes sindicales de los trabajadores, hasta el extremo de que el mismísimo Presidente del Comité de Empresa no lo firma.

Cuando el informe policial dice "la valoración de maquinaria, moldes y matrices estuvo hecha por la Intervención Judicial", ignora lo que dice el dictamen de los Sres. Interventores en cuánto a valoraciones se refiere.

Cuando dice "los créditos que los trabajadores tenían reconocidos en la Lista Definitiva de Acreedores estaban pagados también", está imputando un presunto delito de falsedad en documento público a los firmantes de dicha Lista Definitiva que podría fácilmente haberse aclarado, con el simplísimo expediente de habérselo preguntado a los Interventores. Cumpliendo así con el oficio de 10-4-85 que ordena practicar las más activas y amplias gestiones. Porque, salvo prueba en contrario, "los créditos que constan en la Lista Definitiva de Acreedores la empresa los debe".

Cuando dice el informe policial que los trabajadores votaron el convenio a pesar de que no les debían nada, "perdieron la preferencia de sus créditos que ya estaban pagados y ayudando a que se aprobara tal convenio", vuelve a haber otra actitud presuntamente delictiva y que debía haberse esclarecido, siguiendo el espíritu y la letra del oficio de 10-4-85, que ordena practicar las más activas y amplias gestiones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos denunciados.

Cuando dice el informe policial en la página 37 que los representantes de los trabajadores solamente demandan a SIRSA y no al resto de empresas que según los trabajadores forman grupo, deja de consignar que esos representantes que no demandaron el grupo han sido demandados a su vez por los trabajadores. Diligencias Previas Nº 1411/85-B, Juzgado de Instrucción Nº 21 y parte de cuya documentación se ha extraviado.

Que cuando dice que "según ellos (los trabajadores) formaban grupo", se olvida, lamentablemente, que así lo tiene declarado la Magistratura de Trabajo Nº 8 de las de Barcelona y la Nº 18 también de la Ciudad Condal.

Se olvida se vuelve aún más lamentable cuando, como consta de forma fehaciente en la causa, son ellos mismos los representantes legales de BUTSIR, S.A., ÁREA COMERCIAL, S.A., BUTSIR GAS JAEN, S.A., COMINSER, S.A., reconocen en documento público como son las inscripciones en el Registro Mercantil y la Escritura de Constitución de ÁREA COMERCIAL, S.A., quienes reconocen de forma expresa y terminante la existencia del Grupo de Empresas BUTSIR.

Cuando dice la Policía que "los representantes de los trabajadores no instaron el embargo preventivo, viendo como eran vendidos por el liquidador", se olvida de dos cosas: a) que los representantes de los trabajadores que no instaron el embargo preventivo son los mismos que votaron el convenio y que hoy se hallan incurso en una querrela por los trabaja-



dores en su contra por presunta apropiación indebida de 23 millones de pesetas ante el Juzgado de Instrucción Nº 21 y cuya documentación en parte se ha extraviado, y b) que los representantes que no asistieron a la Junta de Acreedores, que no facilitaron la aprobación del convenio, sí que han solicitado el embargo preventivo ante la Magistratura de Trabajo Nº 3, habiéndosele sido denegado.

Cuando dice la Policía en la página 37 (vuelta) "no parece admisible contar como entregado a los trabajadores lo que éstos sacaron... y que superó 50 millones de pesetas, como pretenden algunos, ya de SIRSA, ya de Liquidación", olvida que SIRSA y Liquidación es la misma cosa en la persona del Sr. SCHNEIDER, entre otras cosas si es que hay que prestarle alguna credibilidad al Informe de la Policía, cuando dice en la página 38 (vuelta), respecto a Eduardo SCHNEIDER SUBIRANA, que es Consejero de SIRSA en representación de COMINSER, S.A., que es Liquidador de SIRSA, y es la persona que contrató al "técnico", Juan Calvete Montorio, al que conocía desde hacía muchos años y que tiene como domicilio el mismo de "Estudios Técnicos y Administrativos Fiscales, S.A.", entidad liquidadora de SIRSA y propiedad del mismo Sr. SCHNEIDER.

Cuando la Policía nos facilita la nómina de las personas que han participado y bajo el epígrafe "Resumen sobre la participación en cargos de dirección y en algunos hechos relacionados con el objeto de la investigación de las siguientes personas", no practica las amplias gestiones que ordena el oficio de 10-4-85, porque ya nos había de resumen y lo ordenado es amplias gestiones y no nos dicen, por ejemplo que el Sr. ROSAL BERTRAND es el Presidente del Consejo de Administración de CIDESPORT, S.A., domicilio postal de todas las empresas del Sr. Calvete, y no nos dice que el Sr. MARTÍNEZ CANALS, Administrador Único de BUTSIR GAS, S.A., y Apoderado de ÁREA COMERCIAL, S.A. se dedicaba

entre otras cosas, a comprar créditos contra SIRSA, gestiones que realizó "al alimón" con el Sr. Santiago FERRAN RICO, Gerente de SIRSA.

Por último, cuando nos dice el Informe de la Policía que el Sr. CALVETE es el verdadero beneficiario de todas estas operaciones, ya que se embolsó muchos millones de pesetas, no está cumpliendo el mandato de fecha 10-4-85 cuando dice "gestiones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos", ya que muchos millones no se sabe cuántos son y donde están, y todas estas operaciones tampoco se han relacionado en parte alguna.

1.2. Análisis de las Conclusiones del Informe Policial, que dividiremos en dos grupos.

1.2.1. Conclusiones en base a hechos constatados principalmente.

1.2.2. Conclusiones en base a juicios de valor que emite la Policía.

1.2.1.1. En la primera conclusión la Policía constata cómo se desarrolla determinada actividad en SIRSA, que, en síntesis, consiste en solicitar la tramitación de un Expediente de Suspensión de Pagos.

Cierre de su centro de trabajo.

Despedir a los trabajadores.

Obtener un convenio de liquidación en la Suspensión de Pagos.

Contratar a "un técnico" que dirigiera las operaciones para la consecución del objetivo fijado".

Que el tal "técnico" fué Juan CALVETE MONTORIO.

Que el tal "técnico" debió ser contratado (éste no ha medado en el asunto).

gún la conclusión que analizamos) a través de Eduardo SCHNEIDER SUBIRANA "que lo conocía desde hacía muchos años".

No hay constancia del intento de Expediente de Regulación de Empleo.

No hay constancia de cuáles serían las operaciones que debería dirigir el tal "técnico".

No se sabe cuál era el objetivo fijado para cuya consecución se había contratado al tal "técnico".

1.2.1.2. La segunda conclusión del informe policial constata cómo hasta 1980 BUTSIR GAS y SIRSA tienen la misma dirección y la misma propiedad.

El 27 de Noviembre de 1981 D. Juan PASCUAL BARRACHINA vende sus acciones de SIRSA, a través del Corredor de Comercio Sr. Torres Álvarez, de Granollers, a COMINSER, S.A. y TRES DIAS ANTES, el día 24 de Noviembre de 1981 ante el Notario D. José Villacueva Sanz, había constituido COMINSER, S.A., suscribiendo y desembolsando acciones por valor de CIENTO MILLONES DE PESETAS, y consta claramente que COMINSER, S.A. controla el 72% de las acciones de SIRSA, por lo que es erróneo concluir diciendo que el Sr. PASCUAL BARRACHINA se apartó de SIRSA, máxime si se tiene en cuenta cuál es el objeto fundacional de COMINSER, S.A.

Cierto que quedó en SIRSA el Sr. Bernabé Carazo, pero con un 28 % del capital, mientras que el resto, el 72%, quedaba en manos de COMINSER, S.A.

Constata como el Sr. PASCUAL BARRACHINA dispone del control absoluto de BUTSIR GAS, S.A. y del de SIRSA a través de COMINSER, S.A.

Se sigue una dirección totalmente independiente entre SIRSA y BUTSIR GAS, S.A., naturalmente, como que SIRSA y BUTSIR GAS actúan como dos vasos comunicantes; mientras uno sube, el otro baja, y la relación es SIRSA - COMINSER - PASCUAL BARRACHINA - BUTSIR GAS.

Por esta razón, en la liquidación de SIRSA, al comprarse ésta sus propios créditos, lo hace "al alimón" a través de FERRAN RICO, como Gerente de SIRSA, y MARTÍNEZ CASALS como Administrador Único de BUTSIR GAS, S.A.

Si la Policía hubiese comprobado, a través de los numerosos documentos que obran en la causa, que COMINSER, S.A. se constituye tres días antes de que el Sr. PASCUAL BARRACHINA vende sus acciones de SIRSA a COMINSER, S.A., y que PASCUAL BARRACHINA es nombrado Secretario del Consejo de Administración de COMINSER, no hubiera podido concluir seriamente diciendo que no hay ningún nexo de unión entre COMINSER y SIRSA, como hace en la conclusión Nº 2.

1.2.3. En la conclusión Nº 5 se constatan una serie de hechos a los que no hay nada que objetar.

Sin embargo, cuando dice que "no se ha demostrado que existiera alguna ganancia para SIRSA", aquí sí cabe preguntarse: ¿Cómo va a haber ganancia para SIRSA si se vende en 20 millones de pesetas la me-



en el dictamen de los interventores aparece valorado en 127 millones de pesetas?

«Queremos, encima, que haya beneficios para SERSA?»

Si la ha habido (ganancia) para el socio de CALVETE (CINEGRUP) que dijo ante la misma Policía el día 31-5-85, a las 11 de la mañana, «preguntado para que diga qué cantidad ha cobrado por su participación en las operaciones descritas, dice: Que hasta el momento ha recibido del Sr. CALVETE en varias entregas OCHO CIENTAS MIL PESETAS. Que cuando aclare las cuentas con el Sr. CALVETE espera sacar otras OCHO CIENTAS MIL PESETAS más o menos. Que cuando CALVETE le habló por vez primera de la necesidad de una sociedad de fuera de Barcelona e inoperante le aseguró un millón de pesetas».

En este orden de cosas, es una verdadera pena que la Policía no haya continuado esclareciendo los hechos a la luz de las declaraciones que ante ella misma prestó el testaferrero de CINEGRUP, cuando dice el 31-5-85 «que sobre mediados del mes de Junio del pasado año (1984) el dicente recibió una llamada telefónica del Sr. CALVETE en la que le dijo que existía una finca que pertenece a una empresa en suspensión de pagos que él llevaba, y que se podría comprar muy bien de precio y así salvarla de la suspensión, pudiendo hacer un buen negocio. Que CALVETE preguntó al dicente si disponía de alguna sociedad inoperante para que figurara como compradora de la finca, ya que precisaba de una que fuera de otra población distinta a Barcelona». Porque, siguiendo con el hilo de la investigación, además de cumplir con lo acordado por el Juzgado el 10-4-85, nos hubiéramos enterado de por qué CALVETE necesitaba de una sociedad de fuera de Barcelona e inoperante. A lo mejor CALVETE lo que pretendía era disponer de una facilidad para llevar a cabo un «proyecto a asechanza artificiosa y oculta dirigida a mal fin». Porque, de ser así y así lo parece, estamos ante la definición que da la Real Academia de la Lengua de la palabra «maquinación» palabra que procede etimológicamente del latín («machinatio») y que utiliza el Código Penal en su Artículo 499 bis, entre otros.

1.2.4. En la conclusión 13 se contradice con lo declarado por el que pagó los 23 millones en efectivo. El Sr. DEVISA, el 20-3-85, ante el Il. Sr. Juez, la representante del Ministerio Fiscal y los representantes de querrelantes y el declarante manifestó «que compró maquinaria en marzo de 1984 por un valor de 37 millones y que el importe total de la compra lo pagó de la siguiente manera: 23 millones en metálico y el resto de 14 millones de pesetas en talón cruzado contra la cuenta de TRADEXPASA», por lo que queda claro que los 23 millones en efectivo metálico no fueron pagados para salarios de tramitación, como sostiene la Policía en su conclusión 13 ni como sostienen los Sres. Sánchez y Valadés.

Hay que hacer constar que en la averiguación de estos hechos se traman Dilig. Previas N° 1411/85-B en el Juzgado de Instrucción N° 21 de Barcelona y en las que se ha dictado en fecha de 4-2-86 Providencia del tenor literal siguiente: «DADA CUENTA; VISTAS LAS PRESENTES ACTUACIONES Y NO HABIENDO SIDO DEVUELTO EL DESPACHO REMITIDO EL 19 DE NOVIEMBRE ÚLTIMO

MO PASADO AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE ESTA CIUDAD, REPRODÚZCASE POR SI HUBIERE SUFRIDO EXTRAÍDO». Esta lamentable situación lleva a mis camaradas a hacer suyos aquellas palabras del Padre de la Oratoria Romana, CICERÓN: «Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?», palabras que, como se sabe, quieren decir: «¿hasta cuando vas a estar abusando, Catilina, de nuestra paciencia?»

1.2.5. En la conclusión 14 se establece una especie de cuenta de resultados a la que hemos de alegar que no se incluyen también bajo la rúbrica de «compró y pagó» los desplazamientos que, sin duda alguna, tuvo que hacer el Sr. Calvete, como, por ejemplo, a Gerona para hablar con el testaferrero de CINEGRUP, luz, agua y gas, y así sucesivamente... Todo ello lo sugiere el hecho de que en el epígrafe «compró y pagó» se incluya a los notarios, profesionales, etc., etc. Sin duda alguna, se trata de una solución semántica poco feliz del concepto «compró y pagó».

Es lástima que la Policía no nos diga en su dictamen por qué razón CALVETE compra créditos contra SERSA por 21 millones, de los que solo recupera 11, y, además, esa operación la realizó con el Sr. FERRAN RICO, Gerente de SERSA, y el Sr. MARTÍNEZ CANALS, Administrador Único de BUTSIR GAS, y Apoderado de ÁREA COMERCIAL, S.A.

Entiende esta parte que en esta falta de concreción se incumple el mandato judicial del «total esclarecimiento de los hechos denunciados».

Bajo el epígrafe «medios financieros utilizados», la Policía, en la conclusión 14, confunde medios con instrumentos, porque ¿Qué medios puede tener GENTA, S.A. con un capital social de 15.000 pesetas? ¿Y CINEGRUP, S.A., cuya aparición en escena obedece a estar domiciliada fuera de Barcelona y estar inactiva? ¿Y TRADEXPASA en la que ni siquiera podían figurar la esposa e hija del cuitado del Sr. CALVETE, según le aconsejaron al Sr. Devesa su abogado y su economista?

Los medios financieros utilizados son los que debían haber sido averiguados por la Policía de acuerdo con el oficio de fecha 10-4-85.

Las cinco S.A. reseñadas en el informe de la Policía en la conclusión 14, bajo el equivocado epígrafe de «medios financieros utilizados», no son más que cinco ficciones jurídicas sin contenido financiero alguno, utilizadas por CALVETE para sus «proyectos o asechanzas artificiosas y ocultas, dirigidas a mal fin».

1.2.2.1. En la conclusión tercera se establece un juicio de valor, y de ahí su inclusión en este punto, que no entendemos a qué obedece, puesto que el oficio de 10-4-85 ordena «esclarecimiento de los hechos» y no requieren para nada juicio de valor alguno.

1.2.2.2. En la conclusión cuarta se vierten también juicios de valor realmente sorprendentes. Así, cuando se dice en el último párrafo «respetando la legalidad vigente», hemos de preguntar: ¿Cuál es la legalidad? ¿Quién le ha pedido a la Policía que diga si se ha respetado la legalidad vigente? ¿Qué función le reserva la Poli-



cía a los Órganos Jurisdiccionales? ¿Cómo puede enjuiciar la Policía sino ir a la otra parte?

Aquí cabría repetir lo dicho en la conclusión 1.1.7., que, si cada cual se dedica a cumplir con su obligación, posiblemente algún día se puedan esclarecer los hechos perseguidos en la presente causa penal.

¿Por qué CALVETE buscó una empresa de fuera de Barcelona y pagó por ello nada menos que un millón de pesetas? ¿Qué legalidad vigente le indujo a ello?

1.2.2.3. En la conclusión sexta se vierten unos juicios de valor que difícilmente pueden haber sido emitidos por la misma persona que redactó los hechos del informe policial a que se refieren las conclusiones aquí analizadas, cuando dice: «En la liquidación de SERSA no ha habido trasvase alguno de patrimonio a sociedades montadas propietarias de SERSA».

Es que justo en la conclusión cuarta analizada en la alegación anterior se dice exactamente que el Sr. PASCUAL BARRACHINA adquiere varios bienes de producción de SERSA.

Cuando dice por lo que hay que excluir la existencia de maquinaciones para autocomprarse a precio bajo ese patrimonio, difícilmente puede engarzar lo anterior con lo expuesto en la página 8 del informe cuando dice: «Para realizar los pagos de las diversas compras de patentes, marcas, moldes y matrices, y maquinaria, se utilizó una cuenta abierta el 22-3-84 con una imposición de 5.000 pesetas. Del estudio de esos pagos se puede afirmar que TRADEXPASA ha tenido traspasos de dinero a favor y en contra con las siguientes entidades: SERSA, ÁREA COMERCIAL, BUTSIR GAS, S.A., ... Con BUTSIR GAS, S.A. y ÁREA COMERCIAL, a las que vendió marcas, patentes, moldes y matrices. Y sigue diciendo el informe en la página 8 (vuelta): «PARECE POR EL CONTARIO QUE TODOS LOS TRASPASOS

OBEDECEN A UNA CONDUCTA PREDETERMINADA POR ALGUIEN QUE PUEDE Y MANEJA LA TOTALIDAD DE LAS SOCIEDADES INDICADAS».

Realmente son dos plumas distintas las que han escrito la conclusión sexta, por una parte, y la página octava del informe, por otra. Y eso es así, o por lo menos así lo parece, si nos atenemos al lenguaje empleado en el informe de la Policía Judicial, estructurado con palabras del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque si hemos de basarnos en el principio filosófico de «ego sum qui sum» (yo soy quien soy), y dándole metafóricamente una personalidad física a las palabras empleadas por la Policía en su informe, cualquiera de esas palabras puede afirmar categóricamente: «Yo significo lo que significo».

1.2.2.4. En la conclusión séptima se vierten unos juicios de valor que merecen ser analizados con todo detalle. Así, en el primer párrafo se dice: «La forma en que se ha realizado la enajenación y adquisición por parte de unas y otras sociedades es lo que ha inducido a pensar en la existencia de maquinaciones fraudulentas».

Hemos de preguntar cuál ha sido esa forma de actuar, al objeto de esclarecer los hechos concretos acaecidos de acuerdo con lo ordenado a la Policía por el Juzgado.

La Policía nos informa en su conclusión séptima de maquinaciones fraudulentas. ¿Es que conoce acaso la Policía alguna «maquinación» que no sea fraudulenta?

Sigue diciendo en el segundo párrafo de la conclusión séptima: «Esta forma, no obstante, según se ha sabido, es la normal en la actuación del Sr. CALVETE. Seguimos sin saber en qué consiste esta «forma» y cómo se ha sabido lo que, según la Policía, se ha sabido».

Que sea la normal actuación del Sr. CALVETE no prejuzga que esa «normali-



dad calveteña" pueda ser o no delictiva.

¿Es que acaso es normal andar buscando sociedades de fuera de Barcelona, con lo caros que están los carburantes, e inoperantes, por cuya inoperancia paga comisiones millonarias?

Cuando dice que "consigue así que sus honorarios sean pagados mediante el beneficio que el mismo genera con los traspaños entre varias sociedades", se debe estar refiriendo a la compra de créditos contra SIRSÁ por 21 millones y vendidos por 11 millones, por lo que sus honorarios, vienen por otros conductos.

Cuando dice que "resultan intrascendentes para el resultado final", debe estar refiriéndose a la venta de un inmueble por 40 millones y que está valorado en 127 millones. Lo que, como es obvio, es intrascendente para el resultado final. Y cuando termina diciendo que "las ventas podían haberse hecho directamente entre SIRSÁ y las entidades que finalmente se quedaron con los bienes", está reconociendo que su informe adolece de una falta clarísima de esclarecimiento de los hechos, porque precisamente, de lo que se trata es de esclarecer por qué interviene CALVETE, cuyo coste, según la página 42 del Informe de la Policía, ha costado 69 millones de pesetas que han salido del patrimonio de SIRSÁ, patrimonio que pertenece a todos los acreedores por hallarse en Suspensión de Pagos.

1.2.2.5. En la conclusión octava se dice que "los Interventores fijaron los peccios", lo cual no es cierto porque no es la misión de los Interventores.

Por lo que no puede hablarse de "desmantelamiento de la entidad", juicio

de valor que no sabemos a qué se refiere, ¿quién ha hablado de desmantelamiento de la entidad? ¿Qué paso con las acciones de BUTSIR MAROC, S.A., de las que incluso llegó a pedirse certificación de la autorización de la adjudicación, cuando ésta nunca se ha llevado a efecto, y, sin embargo, la Policía no ha podido esclarecer donde están? En esta conclusión se ha perdido una oportunidad de informar al Juzgado sobre ellas, puesto que de cesiones de bienes de SIRSÁ se trata.

1.2.2.6. En la conclusión novena se emite juicio de valor rayando en lo temerario. Así, cuando dice: "sino que a veces parece que devuelve a SIRSÁ algunas ganancias". Si devuelve algunas ganancias no lo puede parecer o dejar de parecer. Las ganancias, si han existido, se devuelven o no se devuelven y deberían estar reflejadas en la página 42, donde dice lo que "pagó y cobró", y donde, después de una elemental operación aritmética que la Policía no nos ahorra, se llega a la conclusión de que la Policía no hace constar que la actuación del Sr. CALVETE ha costado 69 millones de pesetas.

1.2.2.7. En la conclusión décima se vierten juicios de valor a los que ya hemos opuesto nuestra alegación 1.1.7.2.

Cuando dice "los trabajadores han percibido todo lo debido por SIRSÁ, menos las indemnizaciones por despido", entendemos que debería decir que SIRSÁ adeuda todavía a los trabajadores las indemnizaciones por un importe de 140 millones de pesetas, según Sentencia de la Magistratura de Trabajo Nº 3 de las de Barcelona y que obra en la causa.

SIRSÁ adeuda también a los trabajadores los salarios de tramitación por un importe de 60 millones de pesetas, cuyos

datos concretos están reflejados en la Sentencia aportada por esta parte de la causa.

"Tales indemnizaciones -dice el informe policial- se puede afirmar que no se han cobrado por culpa no achable a SIRSÁ". Mucho nos hubiera gustado que, en lugar de emitir un juicio de valor tan sin fundamento, nos hubiera dicho el informe de la Policía en su conclusión décima a quien se puede achacar la culpa de que SIRSÁ no pague a sus acreedores.

Por esta vía del absurdo podemos llegar a que alguien, algún día, le achaque esta culpa al que siempre acabamos echándole la culpa de todos nuestros males los españoles, incluidos los clásicos caramelos envenenados.

1.2.2.8. En la conclusión número once se siguen vertiendo juicios de valor del mismo tenor de las siete conclusiones ya analizadas en este apartado. Así dice "que fueron denunciados en su día y no se denunciaron, pero que no parecen constituir ilícito penal". Nuevo modelo de total esclarecimiento de los hechos denunciados.

Otro ejemplo: "que todos los trabajadores, menos los querellantes, acudieron a la Junta y votaron favorablemente el Convenio, coadyuvando a la liquidación de SIRSÁ". ¿Cómo puede extrañarse la Policía que no instasen el embargo preventivo, como hace en la conclusión décima, si ellos mismos votaron para que se liquidara?

Resalta muy oportunamente la conclusión undécima de la Policía que "los propios trabajadores figuraban en la Lista Definitiva de Acreedores con unas cantidades ya pagadas total o parcialmente".

Sorprende que la Policía no haya encaminado sus diligencias al esclarecimiento total de este hecho en concreto, para poder proceder a depurar la responsabilidad en la que se haya podido incurrir por presunta falsedad en documento público.

1.2.2.9. En la conclusión duodécima nos da un ejemplo del respeto a la legalidad vigente con que se ha obrado en SIRSÁ, al decir "el Liquidador no pagó a ALGUNOS créditos preferentes y si lo hizo con los comunes".

Pues bien: la legalidad vigente en materia de Suspensión de Pagos está contenida en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1922 y el Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones concordantes.

No nos dice la Policía cuáles son esos créditos preferentes y en qué caso y cuantía los pagó y en qué legalidad vigente se basó para pagar a unos sí y a otros no.

Por todo lo expuesto,

AL JUZGADO SUPLENTE: Se digne a admitir el presente escrito y, en su virtud, tener por cumplimentado en tiempo y forma, lo acordado por este Juzgado mediante Providencia de fecha en relación con el informe remitido a la presente causa por la Policía Judicial.

Es justicia que pido en Barcelona, a diecinueve de Febrero de mil novecientos ochenta y seis.





EL GOBIERNO ESPAÑOL ENCUBRE A LOS TORTURADOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO

Con esta frase podíamos sintetizar el discurso pronunciado en la Universidad Catalana de Verano, por su Vicepresidente, Su Señoría el Parlamentario D. Josep Lluís Carod-Rovira, Portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.

Por falta de espacio transcribiremos algunas frases de su conferencia en la citada Universidad:

Refiriéndose a personas integradas en las Fuerzas de Orden Público del Estado Español los calificó de "PROFESIONALES DE LA TORTURA".

Mas adelante enardecido a los casi cuatrocientos asistentes al acto al acusar al Gobierno Español de no respetar los derechos humanos, añadiendo: "EL ESTADO ESPAÑOL HA HECHO DE LA TORTURA UNA PRÁCTICA SISTEMÁTICA".

El Parlamentario y Vicepresidente de la Universidad no se extrañó que justo cuando España "SE HUNDE EN UNA GRAVE CRISIS ECONÓMICA Y MORAL LA CORRUPCIÓN SE EXTIENDA A TODOS LOS NIVELES".



Carod-Rovira acusó también a los medios de comunicación de "COMPLICIDAD" con el Gobierno Español por ocultar "CON SU SILENCIO VERGONZOSO LO QUE ESTAMOS VIVIENDO..."

Por su parte Josep Guàrdia insistió en la identificación entre PSOE y tortura. Pero el momento de mayor emoción fue cuando el periodista José María López Llavi leyó una carta de su hijo detenido en la reciente operación policial.

Al acto también asistieron el Diputado Carlos Campuzano, que en su parlamento hizo una defensa de la verdadera democracia; el Diputado Carlos Campuzano es el líder de las Juventudes Nacionalistas de Catalunya, sección de Convergencia Democrática de Catalunya, el partido que preside el Honorable Jordi Pujol Presidente del Gobierno Autonómico catalán.



Más de 500 agentes, implicados durante el año pasado en 268 casos de lesiones

La Administración ampara a guardias civiles y policías condenados por malos tratos

JESÚS DÍAZ, Madrid
Policías y guardias civiles condenados por delitos de torturas reciben trato de favor por parte del Gobierno y la Administración de Justicia. Prácticamente ninguno ingresa en prisión, muy pocos cumplen penas de inhabilitación y algunos son indultados. Según Interior, en 1991 hubo 268 procedimientos judiciales contra 500 funcionarios denunciados por malos tratos, lesiones o torturas. La Asociación Contra la Tortura afirma que en los últimos tres años han sido condenados 78 funcionarios.

La Asociación contra la Tortura conoce los nombres de 78 funcionarios condenados y 29 abusos durante los últimos tres años. Los demás están pendientes de puesto o de diligencias judiciales. Diversas fuentes coinciden en que es "muy difícil" controlar el cumplimiento de las penas, en parte porque la Administración protege a los condenados.

El último caso de presunto favorecimiento conocido afecta al capitán de la Guardia Civil José Pérez Navarrete, que ha sido nombrado asesor de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, mientras que su compañero José Antonio Hernández del Blanco ha sido contratado para los servicios de información de la Guardia Civil, pese a que ambos fueron condenados por torturas a Juana Goicoechea en 1984. Interior asegura que la contratación es legal, aunque la pena impuesta conlleva cuatro años de inhabilitación.

"En los casos de inhabilitación, la propia Administración busca subterfugios para burlar la ley", afirma Jorge del Cura, de la Asociación contra la Tortura. "Nunca podemos saber si se cumple o no la sentencia porque a las partes personadas como acusadoras no se les da traslado de la liquidación de condena", añade.

El teniente coronel Rafael Masa, condenado a una inhabilitación de seis años por su relación con las torturas sufridas por Tomás Linaza en 1981, no sólo no ha sido separado del servicio, sino que incluso ocupa un destacado puesto en los servicios de información de la Guardia Civil.

Lucha antiterrorista

También son frecuentes los casos de agentes que acceden de categoría sin que la Administración tenga en cuenta han sido procesados o condenados. No obstante, la Administración no aplica siempre el mismo rasero. "Si el delito cometido por el agente está relacionado con la lucha antiterrorista, Interior es más benevolente que en otros supuestos", reconocen fuentes policiales.

Juan Carlos Fernández Vales, asesor del Sindicato Unificado de Policía, afirma que desde hace dos años la Dirección General de la Policía (DGP) cumple a rajatabla las sentencias de inhabilitación profesional de los agentes. El celo de la DGP alcanza tales extremos, dice, que ha llegado a separar del cuerpo a un funcionario condenado a suspensión de todo cargo público, por lo que el letrado ha debido recurrir a la Audiencia "para explicar que policía no es un cargo público, sino una profesión".

La DGP, sin embargo, no mostró tanta diligencia para ejecutar la sentencia que recayó sobre los dos inspectores acusados

de no haber evitado las torturas que causaron la muerte al etarra Joseba Arregui. José Antonio Gil Rubiales siguió trabajando en la Brigada de Documentación y Julián Marín Ríos continuó como jefe de los artificieros hasta que la dirección del cuerpo se vio obligada a hacer efectiva la condena.

Gil, finalizada la condena de dos años de inhabilitación, se incorporó la pasada primavera a las patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid. Al ahora comisario Marín le faltan cinco meses para cumplir los tres años que recayeron sobre él y luego se reintegrará a la policía, de la que actualmente sólo percibe 11.700 pesetas como recompensa por las medallas que posee. Marín pidió el indulto al Gobierno en octubre de 1989 y todavía hoy no ha recibido contestación.

El Gobierno se mostró más comprensivo hacia los guardias civiles José Domínguez Tudá, Manuel Macías Ramos y José Antonio Román Ríos, condenados por el Supremo en 1990 a penas de dos a tres años de inhabilitación profesional por torturas a José María Olarra. Los tres funcionarios fueron indultados el 8 de febrero del año pasado y Domínguez no cumplió los 6 meses de privación de libertad que tenía pendientes.

La Dirección de la Policía tampoco mostró diligencia para ejecutar la pena de 10 años de inhabilitación al inspector Manuel Amadeo Abonjo Blanco, condenado en 1984 a 10 meses de arresto y 10 años de inhabilitación por las torturas de Xabier Otaola. En octubre de 1986, Abonjo seguía en activo en Valencia, después de haber obtenido del tribu-

nal que le eximiera del cumplimiento de la pena de prisión.

Son raros los casos de funcionarios que llegan a ingresar en prisión. "Cuando hay sentencias de cárcel, los beneficios penitenciarios se les aplican muy rápidamente", dice Jorge del Cura, miembro de la Asociación contra

la Tortura. Y pone como ejemplo la rapidez con que ha obtenido el régimen abierto en inspector Victoriano Gutiérrez Lobo, condenado por la desaparición de Santiago Corrella el Nari.

Otro asunto de probable rareza: Los 10 funcionarios de prisiones condenados en no-

viembre de 1990 por la muerte por torturas de Agustín Rueda en 1978 sólo han pasado unos meses entre rejas, no ingresaron en la cárcel hasta mayo de 1991 y dos meses más tarde obtuvieron el régimen abierto.

EL PAÍS, jueves 17 de septiembre de 1992

Gil-Robles pide suspender cautelarmente a los policías acusados de malos tratos



Alvaro Gil-Robles, Defensor del Pueblo.

La ley vetará al torturador cualquier función pública

J. M. L., Madrid
El delito de torturas queda recogido en el nuevo Código Penal, en cuanto a su definición, prácticamente igual que el vigente artículo 204 bis. Se mantienen las penas de privación de libertad en su grado máximo cuando de las torturas se derivan homicidios, lesiones, amenazas y coacciones, pero se pasa de la inhabilitación especial establecida actualmente —que permitía al torturador ser funcionario público de otro cuerpo diferente al que pertenecía cuando cometió el delito— a la de inhabilitación absoluta de 10 a 15 años, que le impedirá ejercer toda función

pública durante el tiempo que fije el tribunal.

Las penas por torturas aplicables a funcionarios policiales y de control penitenciarios se extienden a los de centros de protección o corrección de menores respecto a los internos en los mismos.

El nuevo texto mantiene que las faltas de lesiones se considerarán como delito y se sancionarán con penas de prisión hasta de cuatro años y con inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 a 15 años.

El actual Código Penal prevé también que la autoridad o funcio-

ionario público que durante un procedimiento judicial penal o en la investigación de un delito somete al interrogado a condiciones o procedimientos que le intimiden o violenten su voluntad será castigado con la pena de arresto mayor (de uno a seis meses) e inhabilitación especial.

En el proyecto de nuevo Código Penal referido a las Cortes, que tipifica las torturas en el artículo 351, la pena se eleva de seis meses a dos años de prisión y la inhabilitación especial queda fijada de 10 a 15 años.

Las penas de los apartados precedentes se impondrán tam-

bién a las autoridades o funcionarios que, faltando a los deberes de su cargo, permitieren que otras personas ejecuten las torturas.

El anteproyecto de Código Penal elimina una incorrección técnica que se deslizó en la última reforma de 1989, en la que el vigente artículo 421 utilizó el término "tortura" para agravar la pena del delito de lesiones producidas por particulares. Sin embargo, los convenios internacionales y la doctrina jurídica consideran que la tortura es un delito cuyos únicos autores son los funcionarios públicos.



CARTA ABIERTA AL EX-JEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE BARCELONA JUSTO AGUILERA

Nuestra Asociación catalana contra la Injusticia y la Corrupción en cumplimiento de nuestros fines desea obtener los máximos datos posibles de hechos que ocurren en nuestra Sociedad con el objeto de poder ayudar a tantas víctimas inocentes como existen en contraposición con conocidos "mafiosos" que no hacen mas que recibir prevendas sin que nadie, ni la Policía, ni la Justicia les responsabilice de ninguno de sus actos presuntamente delictivos.

Por todo ello solicito de V.I. nos conceda una entrevista; En ella tendríamos interés en conocer su opinión sobre hechos como

1) La destrucción de la **empresa filatélica** de D. Benjamín, su detención, ingreso en la prisión Modelo y posterior absolución judicial previo juicio.

2) Igualmente la **detención del Dr. Carlos Obregón** quien junto a V.I. y su compañero Carlos Esteban, ayudaba a investigar la estafa de la empresa SIRSA-Cominser de la Banca Garriga Nogués-Javier de la Rosa, máximo ejecutivo. Actualmente tan en candelero con sus nuevas Suspensiones de Pagos, entre ellas ERCROS... y especialmente TORRAS.

El Dr. Obregón, que gracias al diputado de turno del Colegio de Abogados quien presentó "habeas corpus" quedó inmediatamente en libertad; condenando hasta el Tribunal Supremo en costas a los denunciantes, que falsamente denunciaron al abogado Obregón, aunque ya la prensa había recibido órdenes de manipular la noticia. Posteriormente el Dr. Obregón sufrió un secuestro de 9 días, un tiro en el brazo derecho y seis allanamientos de Despacho (dos con incendio).

Todo ello denunciado, sin resultado positivo alguno mas lo que si está claro que el

Dr. Obregón ha visto afectada su salud, habiendo tenido en menos de un año, 2 derrames cerebrales que ha dejado sus secuelas irreversibles. Y los ex-trabajadores de "SIRSA" siguen estando al pie de los juzgados todos los lunes por las mañanas con sus sentencias ganadas...

3) Otro Director de Academia sufrió también detención, ingreso en la prisión y posterior absolución. El Fiscal Sr. Llorens Borràs dijo que había policías que hacían atestados tan voluminosos que impresionaban a los jueces.

4) La destrucción de la **Coordinadora Nacional de la lucha antidroga**. La detención de D. Jose de Mirandes, su presidente, así como su ingreso en la Modelo, campaña difamatoria a través de todos los medios, **el intento de asesinato en la propia prisión** (evitado en último momento por la valiente actuación de otro policía).

En contraste con el documentadísimo informe pericial por los peritos censores nombrados por el juez. La Sentencia firme del Juzgado nº 1 de Primera Instancia demuestra con claridad meridiana en su fallo y que es la Coordinadora quien debe dinero al entonces Presidente (que al final el Juez dictó el correspondiente Auto de Sobreseimiento y Archivo definitivo). Su irreversible incapacidad laboral absoluta que el shock recibido le produjo, según informe del especialista que le correspondió por Seguridad Social.

5) Un recluso del centro penitenciario de Orense, **empresario catalán Sr. Odena**, interpuso una querrela en la que estan implicados entre otros el Magistrado D. Adolfo Fernandez Oubiña y D. Juan Piqué Vidal y Francisco Javier de la Rosa por evasión continuada de divisas de ignota procedencia.

6) El bochornoso caso de la estafa del **BEX** juzgado en el mes de abril con grandes titulares en todos los medios, en que de 27 procesados, antes de finalizar la vista, la propia fiscal retiró casi todas las acusaciones de personas que por la presunción de un delito fueron detenidas e ingresadas en prisión (y embargados sus bienes) algunas por tiempo suficiente como para que su trauma siga siendo causa de graves trastornos, sin haber sido indemnizadas.

El caso del BEX no está cerrado, aunque a veces el silencio corrompa mas que la mentira.

Estos no son mas que botones de muestra de asuntos ciertos que se rumorean entre la ciudadanía y que no da sensación alguna de seguridad de ninguna clase.

Por todo ello reitero una entrevista para recabar su autorizada opinión esperando día y hora para la misma.

Caso de que el reglamento o normas internas no autorice a V.I. a realizar entrevistas ruego me indique un interlocutor válido al efecto.

Agradecido por su atención



Adela Vázquez Lluch
Abogada



TERRORISMO DE LAS BANDAS ILEGALES ¿QUÉ OCURRE DESPUÉS CON LAS VÍCTIMAS?

Las víctimas de ETA cobrarán mas.

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de hoy (19-6-92) un decreto para incrementar en un 25% las indemnizaciones económicas a las víctimas del terrorismo. Indemnizaciones por daños en viviendas y mobiliario-anticipo a los heridos.

Casualmente estas medidas coinciden con la interposición de una demanda ante la Audiencia Nacional de unos afectados por el atentado de Hipercor del que ahora se cumple el quito aniversario.





"¡Qué asesinos!, ¡Qué criminales!". "Pobre gente, que culpa tendrán...". "Es que no tienen perdón, matar a sangre fría". Estos comentarios son los típicos tópicos que siempre se escuchan al ocurrir un atentado. Toda la gente se conforma con dar su opinión al respecto, pero sin inmiscuirse en el futuro que le aguarda a la víctima. Es por ello por lo que me he decidido a hacer llegar a los lectores de esta revista de la situación real en que queda un afectado por el terrorismo después de los días en que son noticia.

Si el título de este artículo dice "¿qué ocurre después con las víctimas?", es por una simple y clara razón. El conciudadano piensa que la víctima va a ser cuidada, custodiada y resarcida a todos los niveles por parte de los responsables de hacerlo, es decir, las administraciones públicas. Como dice el refrán, "una imagen vale más de mil palabras", pero un ejemplo vale más que un diccionario completo.

Si hablamos de la problemática social, ahí van varios muestrarios diferentes de cómo se destruyen las familias: una víctima del atentado de Hipercor que perdió a sus dos hijas y su esposa, aprovechando su poca estabilidad emocional en aquellas fechas, fue timada por sus socios en los negocios que tenían conjuntamente. La víctima de otro atentado que empezó a vagar por nuestra querida Barcelona y se tiró tres días perdido por la calle sin recordar nada de lo que hizo en ese lapso de tiempo. El niño de otro atentado que perdió a sus padres y ha tenido que ser adoptado por sus

abuelos, con todos los gastos que esto comporta. ¿Dónde está la prometida colaboración de los estamentos oficiales?

Si hablamos de la problemática médica, no acabaríamos ni teniendo cien páginas de espacio. Heridos graves que tienen que pagarse las enfermeras de su bolsillo, como a una modista a la que les destruyeron las manos y no ha vuelto a coser en cinco años. La niña que tiene que estar pasando un continuo calvario porque las prótesis en su pierna amputada no se adaptan como ella (y las que la conocemos) deseáramos. Los numerosos huérfanos que no reciben ni una sola ayuda de tipo psicológico para intentar salir adelante en su desgracia. El empleado manipulador de alimentos al que la mutua correspondiente le obliga a trabajar siendo portador crónico de dos hepatitis diferentes. El trabajador que es obligado a desempeñar el mismo trabajo que antes de un atentado aunque haya perdido un 55% de la fuerza de las manos. La madre que tiene una hija preciosa, pero sordomuda, por culpa del shock emocional que le produjo el estallido de una bomba en su lugar de trabajo. La viuda que es despedida de su trabajo diez días después del atentado a su marido por que "no rinde como antes". Las numerosas secuelas físicas que quedan después de ser intervenido en multitud de ocasiones por las heridas recibidas.

Si hablamos de la problemática psicológica, hay casos espeluznantes. Afectados en atentados que tienen que escuchar de parte de la Administración que, como son heridos leves y sus heridas no revisten

gravedad, no merecen unos cuidados ni un seguimiento, por mínimo que sea. Muchos afectados tienen graves problemas psicológicos varios años después de sufrir un atentado, pero eso es algo que a los "de arriba" no les preocupa porque el "dolor" no puede ser cuantificado, y el psicológico, menos.

Si hablamos de la problemática económica, es mejor no empezar, porque no se acaba. Desde la costumbre de todos los terroristas enjuiciados en decir que son "insolventes" a la negativa del Estado a hacerse responsable subsidiario. Ninguna víctima del terrorismo cobra una sola peseta de las que el Poder Judicial obliga a pagar al asesino hacia su víctima. Pero hay excepciones, como la del terrorista que asesinó a once personas en Zaragoza, que acaba de cobrar del Estado casi cinco millones de pesetas por haber sido víctima de otro grupo terrorista.

Ya no podemos nombrar la palabra justicia en ninguno de estos casos, pero es que tampoco podemos nombrar la palabra "lógica". Y una problemática que puede tener soluciones pero no puede tener lógica, ni es problemática ni es nada. Es, simplemente, desidia, abandono, incompetencia, rancanería, olvido...

Quien haya podido aguantar este escrito tan "patético", tan "quejumbroso", podrá pensar que esto es el derecho al pataleo que nos queda a los que somos pisoteados en nuestros derechos. Pero si me he decidido a comentar algunos de los miles de casos que existen, ha sido por la siguiente razón: como homenaje a todas y cada una de las personas, víctimas del terrorismo o no, que se escandalizaron y/o se dieron un hartón de llorar (de rabia, de asco o de pena) cuando tuvieron la desdicha de ver un "chiste" publicado en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA el pasado día 4 de junio de 1992, en el cual se hacía una chirimía y una burla indignante de uno de los actos más sanguinarios y asesinos que pueden suceder: la explosión de un coche bomba con víctima, sea del tipo que sea.

Las víctimas, sabemos que somos unos pobres desgraciados, algo así como un "grano en el culo", una molestia a según qué conciencias dormidas. Pero lo que no sabíamos es que también podíamos dar lugar a situaciones chistosas, alegres, chabacanas y divertidas para un pobre concesionario de automóviles, un degradado



dibujante y un medio de comunicación que no se toma la molestia de controlar sus momentos de humor.

Todas esas partes implicadas pueden dar gracias de que las víctimas del terrorismo somos personas con sentimientos y, sobre todo, con educación. Es por ello por lo que hacemos públicas nuestras opiniones más recónditas, por no herir la sensibilidad de nuestros prójimos, como han herido la nuestra.

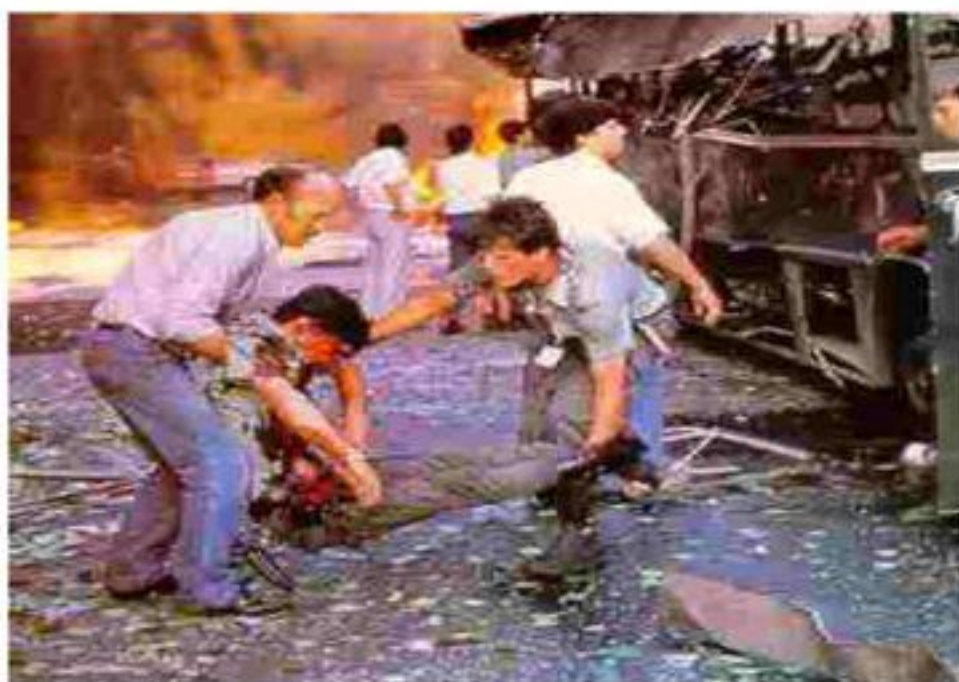
Sabemos que no despertamos un gran interés por parte de los que deberían hacerse responsables de nosotros, pero ahora también sabemos que somos un argumento válido para hacer reír. Pero nos queda un consuelo: Los payasos del circo también hacen reír, pero son lo mejor del espectáculo. Nosotros también somos lo mejor del espectáculo en que se ha convertido la palabra "terrorismo", y al igual que los payasos, también despertamos la conciencia de algunos ciudadanos bien nacidos. Para los malnacidos ya existe otro mundo. El mundo de las bombas, del asesinato por la espalda, el mundo de los "revienta-niños", del destrozar a seres indefensos sin ninguna razón ni argumento...

Es por esto por lo que acepté el ofrecimiento de ACINCO, de explicar la situación de las víctimas del terrorismo; para que todo el mundo sepa que, aunque nos han destrozado el pasado, nos olvidan en el presente, aún creemos en el futuro.

Todo esto es lo que ocurre "después" de un atentado. ¿Alguien se lo había planteado?



Roberto Manrique Ripoll
Delegado en Cataluña
de la Asociación
Víctimas del Terrorismo





EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA Y LA DEMANDA INTERPUESTA POR



C/. Aragó, 281, 2n. 2a.
Tel. 215 14 84 Fax 487 15 60
08009 BARCELONA

**MÉTODOS DE CAPTURA DE AVES AUTORIZADOS POR
EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA SON DECLARA-
DOS NO AJUSTADOS A DERECHO POR EL TSJ
DE CATALUNYA**



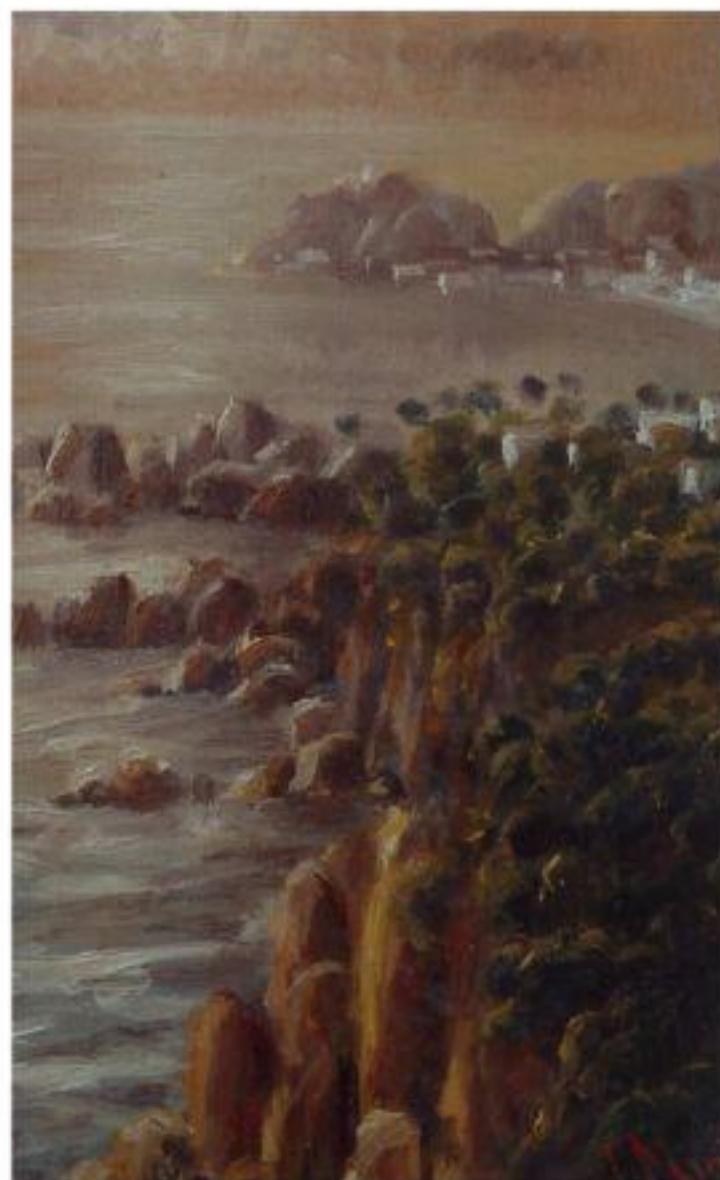
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA ESTIMA UNA DEMANDA INTERPUESTA POR LA LLIGA PER LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL (DEPANA) CONTRA EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE LA GENERALITAT POR NI APLICAR CORRECTAMENTE LAS LEYES QUE EL MISMO HABIA ELABORADO Y PROPUESTO AL PARLAMENT PARA SU APROBACION: LA LLEI DE PROTECCION D'ANIMALS.



Recientemente, la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dictado sentencia mediante la cual se anula el artículo de la Orden General de Vedas de la temporada de caza 1.988-89 que permitía la captura del zorzal común con "liga", a instancias de un contencioso-administrativo interpuesto por DEPANA. El artículo anulado hacía referencia a un método de caza no selectivo prohibido en nuestro país por la legislación interna e internacional, pero que la Generalitat de Catalunya se ha obstinado en autorizar año tras año. Esta resolución, aunque muy tardía (han pasado casi cuatro años), supone un serio revés al Departamento de la Generalitat responsable de esta autorización: el de Agricultura, Ramaderia i Pesca, y por otra parte la confirmación plena de las tesis sostenidas por la entidad que suscribe. Una vez declarado que el Derecho estaba de la parte de la protección de las especies, algo que era obvio, queda la segunda parte: ¿Qué sentido tiene obtener una sentencia favorable una vez que el daño es irreversible? ¿Quién ha de responder de este daño?

Antes de pasar a comentar ambas cuestiones, sería interesante definir con carácter previo, un poco, en qué consiste el método prohibido que ahora ha sido declarado ilegal, es decir la "liga". A grandes rasgos, se trata de una instalación fija llamada "barraca" con aspecto de árbol, desde la cual se emite el reclamo de las aves que emigran al sur en otoño, y donde se coloca una cantidad suficiente de "varetas" untadas de una sustancia pegajosa ("vesc", "visco" o muérdago) para aprehender a las aves. Obviamente, el pájaro que en migración pasa cerca de esta instalación, al oír el reclamo que se emite repetidamente, de forma instintiva tiende a detenerse en él, con lo que queda cautivo. Es un sistema prohibido por la legislación internacional (Convenio de Berna, Directiva para la protección de las aves silvestres) por ser no selectivo. Ello

significa que es un sistema de captura indiscriminado en el que caen todo tipo de aves: las que se permiten capturar y las protegidas por el beneficio que prestan al ecosistema, que principalmente son las insectívoras. Se ha de tener en cuenta que en las migraciones suelen darse grupos mixtos de especies de aves, y que por ejemplo, al haber una bandada de pájaros prendida en la barraca, algunas aves rapaces intentan capturarlas y quedan también atrapadas. El ave cautiva puede permanecer varias horas prendida de las pegajosas varas, luchando inútilmente por liberarse y engullendo la sustancia viscosa al intentar limpiarse, que le somete a una lenta agonía.





Antiguamente era una manera de aportar nuevos nutrientes a la dieta, tradicionalmente en ciertas zonas. Modernamente, si bien se considera que aún tiene dicho carácter, se aprovecha este arraigo popular para incorporar a este sistema los adelantos de la técnica: cassetes, magnetófonos de reproducción ininterrumpida, etc. No importa tanto la tradición del silbido como la cantidad de pájaros que caigan, que pueden ser de varios millares en jornadas de fuerte paso. Esta actividad se centra en la explotación del zorzal común. En principio queda circunscrita en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, pero tiende a extenderse gracias a la complicidad de la Administración Catalana. En lugar de resolver los problemas de fondo de una población mayoritariamente agraria, la caza del tordo se utiliza como moneda de cambio para no abordarlos y dar soluciones a la problemática rural.

Regresando a las cuestiones anteriormente planteadas, la primera de ellas no tiene solución alguna: la justicia, si se imparte y cuando es impartida correctamente, suele llegar tarde. Con los años que han pasado, más de un millón de pájaros han muerto a causa de un método prohibido, lo cual significa un daño irreparable, ni aún pidiendo la más alta de las indemnizaciones. Por otro lado, no se ha de olvidar que este fallo se produce principalmente en base a la Llei de Protecció dels Animals, que fue una ley avanzada y pionera en su momento para la protección de los derechos de los animales. Curiosamente, el mismo Conseller que fue padre de esta norma tan positiva para los postulados de los que defienden intereses difusos (el Sr. Miró i Ardèvol, actual presidente del COC), era el que anualmente autorizaba de forma expresa este sistema que ahora se declara ilegal. Posteriormente, su sucesor ha seguido la misma línea. Este punto enlaza con la segunda cuestión, la cual sólo puede ser valorada desde la impotencia de un colectivo preocupado por la correcta gestión de los recursos naturales, ya que la

responsabilidad sólo puede ser política, y en el caso de un ex-conseller, ésta no puede materializarse. De hecho, sólo puede utilizarse tribunas como la presente para solicitar a quien corresponda que este Departament que explota la naturaleza, no tenga igualmente la responsabilidad de conservarla, porque es juez y parte, y porque cada vez que ambos conceptos se enfrentan siempre sale victorioso el mismo. Este asunto es sólo una muestra de la nefasta política (si es que puede llamarse así) del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en materia de protección del medio natural, y lleva a la inevitable conclusión que es difícil que haya algún organismo que pueda hacerlo peor.

Dicho esto y existiendo un organismo específico para la gestión y ordenación del medio ambiente como es el Departament de mismo nombre, no es osado reclamar que éste último asuma las competencias que se resiste a perder Agricultura.

